

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.



LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA JUSTICIA: UN ANÁLISIS DE LOS
DETERMINANTES DE LAS PREFERENCIAS POR JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL
CASO COLOMBIANO

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA

ALEJANDRA QUEZADA TIRADO

DIRECTORA DE LA TESINA: DRA. SANDRA LEY GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

2020

AGREDECIMIENTOS

A las primeras personas a las que quiero agradecer es a mis padres. Gracias por todo el apoyo que me han dado y por la confianza que han depositado en mí. A ustedes y a mis abuelos, gracias por darme abrazos y consejos cuando más los necesito. Si no fuera por ustedes y por todo su amor, definitivamente no estaría aquí. Espero algún día ser al menos la mitad de lo que son ustedes. En la misma línea, quiero agradecer a mi hermana. Mi mejor amiga y mi compañera de vida. Gracias por estar conmigo en los mejores y peores momentos de mi vida. Gracias por traer al mundo a dos angelitos que cada día me impulsan a buscar soluciones para que les toque vivir en un mundo mejor que el que nos tocó a nosotras. Asimismo, agradezco a mis tías y tíos por todas sus historias y cariño.

Ahora, fuera de mi entorno familiar, hay personas que fueron clave para mi crecimiento personal y profesional durante estos cuatro años. En especial me gustaría agradecer a la Dra. Sandra Ley. Gracias por ser la mejor directora de tesis, jefa, profesora, académica y persona. Gracias por ser un ejemplo a seguir con un sentido humano tan fuerte, por haber creído en mí y por siempre tener las puertas abiertas para escucharme y guiarme.

También quiero agradecer al Dr. Pablo Kalmanovitz, a la Dra. Lucía Tiscornia y al Dr. Gerardo Maldonado por siempre recibirme en sus oficinas con la mejor actitud y escucharme desde antes de que el proyecto tomara forma. Gracias por la paciencia que tuvieron, por sus consejos y por siempre dar críticas constructivas. Igualmente, me gustaría agradecer a la Dra. Angelika Rettberg porque sin su increíble trabajo en Colombia y sin su apoyo para encontrar los datos que uso aquí, este trabajo no habría sido posible. Es un honor que mi tesina tenga un pedacito de ustedes.

Además de las personas ya mencionadas, mi paso por el CIDE fue maravilloso por mis compañeros y por los profesores con los que tuve la fortuna de compartir salón de clases. Nunca me sentí sola en el camino y mis clases fueron apasionantes. No sería la persona que soy hoy sin la hermosa generación que me tocó (CPyRRII 2016-2020) y sin la calidad de los profesores de los que tuve la oportunidad de aprender. En especial, me gustaría agradecer a la Dra. Paola Encarnación, a la Dra. Mónica Jacobo, al Dr. Mauricio Merino, a la Dra. Amalia Pulido, al Dr. Gilles Serra y al Dr. José Antonio Aguilar. El rigor y pasión que pusieron en sus clases, y la guía que me dieron, tanto académica como personal, fueron fundamentales para que pudiera llegar a este momento.

Y, por último, pero no por eso menos importante: gracias a Carlos, a mis Fers (Fons, Manzanares y Serrano), a Xime, a Cami, a mis Paos (Nacif y Gómez), a David, a Lau, a Nat, a Vic, a Lili y a Bencho. Tengo la fortuna de tener amistades bellísimas, pero sin ustedes en especial, no sé en dónde estaría ahorita. Gracias por todos los cafés, las comidas y las pláticas. Gracias por todo el cariño y el apoyo que me han dado durante estos años. Son unas estrellitas de esperanza y felicidad en mi vida.

¡Gracias!

RESUMEN

Dada la creciente literatura sobre el efecto de la violencia masiva sobre las preferencias individuales, en específico sobre qué exigencias tienen las víctimas, la presente tesina busca contestar a la siguiente pregunta: ¿qué determina la preferencia por unos mecanismos de justicia transicional (JT) sobre otros? La relevancia de estudiar a la opinión pública sobre la JT radica en que, desde que surge el acuerdo de crear procesos de JT con centralidad de la víctima, ha sido notorio que, aun si la decisión y los procesos no necesariamente involucran a todos los ciudadanos, las víctimas y las no-víctimas desempeñan un papel clave en el correcto desarrollo de las lógicas de paz en sociedades post-conflicto (Trejo et al., 2018; Voors et al., 2012; Nussio et al., 2015).

El argumento principal del presente trabajo es que el nivel de violencia en el municipio influye en el individuo y afecta sus preferencias, lo cual conduce a una demanda por JT, sin importar si son víctimas o no. La expectativa es que, a mayores niveles de violencia, las exigencias por medidas de justicia retributiva serán mayores que las demandas por medidas de justicia restaurativa. Aunque se espera que la identidad de víctima no sea decisiva, sí se espera que las víctimas en contextos con violencia alta tengan preferencias más fuertes que las de las víctimas que se encuentran en municipios con violencia baja. No obstante, los hallazgos muestran que el nivel de violencia y la victimización no son variables explicativas para las preferencias de los individuos por distintos tipos de mecanismos de JT. La evidencia empírica sugiere que factores como el partidismo y la relación con los grupos armados podrían tener un papel más importante del que se les suele atribuir en la definición de preferencias por medidas de JT.

ÍNDICE

Introducción.....	1
I. ¿Qué sabemos sobre la JT en la opinión pública?.....	3
II. Otra aproximación al estudio de las preferencias por mecanismos de JT.....	6
III. Sobre la experiencia colombiana con la violencia y la justicia transicional.....	10
<i>III.1. El conflicto colombiano</i>	10
<i>III.2. De la justicia transicional en Colombia</i>	11
IV. Diseño de investigación para la evaluación del efecto de la violencia en las preferencias individuales de JT en Colombia.....	12
<i>IV.1. Variables dependientes</i>	14
<i>IV.2. Variables independientes</i>	15
<i>IV.2.1. Violencia contextual</i>	15
<i>IV.2.2. Victimización</i>	18
<i>IV.3. Controles</i>	21
V. Resultados.....	23
VI. ¿Cómo se definen las preferencias por los distintos mecanismos de JT?.....	30
VII. Conclusiones.....	33
Referencias.....	36
ANEXOS.....	41
<i>Anexo 1. Operacionalización de las variables para los modelos con LAPOP 2013 presentados en la Tabla 5</i>	41
<i>Anexo 2. Operacionalización de las variables para los modelos con LAPOP 2016 presentados en la Tabla 6</i>	49
<i>Anexo 3</i>	56
<i>Anexo 3.1: tasa de desplazados y de homicidios de 2003 a 2012 e interacción entre tasa de homicidios y victimización con la tasa de homicidios como la variable contextual de referencia</i>	56
<i>Anexo 3.2: tasa de desplazados y de homicidios de 2012 e interacción entre tasa de desplazados y victimización con la tasa de desplazados como la variable contextual de referencia</i>	57

<i>Anexo 3.3: tasa de desplazados y de homicidios de 2012 e interacción entre tasa de homicidios y victimización con la tasa de homicidios como la variable contextual de referencia.....</i>	<i>58</i>
<i>Anexo 3.4: prueba de la hipótesis de Weintraub et al (2015) sobre la relación cuadrática entre violencia y apoyo a la paz. El término de interacción es entre victimización y tasa de desplazados, y en vez de observar la tasa de desplazados como una variable lineal, se crea el término cuadrático.....</i>	<i>59</i>

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS

Tabla 1: Fraseo de variables dependientes en LAPOP 2013 y 2016.....	14
Tabla 2: Variación de la tasa de homicidios y de desplazamiento de 2003 a 2012 y de 2003 a 2015.....	16
Tabla 3: Fraseo de preguntas de LAPOP 2013 y 2016 utilizadas para la variable dicotómica de victimización.....	19
Tabla 4: Porcentaje de víctimas y no-víctimas de la muestra de LAPOP de 2013 y 2016.....	20
Tabla 5: Efecto de la violencia en las preferencias individuales sobre mecanismos de JT en 2013.....	24
Tabla 6: Efecto de la violencia en las preferencias individuales sobre mecanismos de JT en 2016.....	28

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Panel 1.....	17
Mapa 1.1: Tasa de desplazamiento de 2003-2012 por cada 1,000 habitantes.....	17
Mapa 1.2: Tasa de desplazamiento de 2003-2015 por cada 1,000 habitantes.....	17
Panel 2.....	18
Mapa 2.1: Tasa de homicidios de 2003-2012 por cada 1,000 habitantes.....	18
Mapa 2.2: Tasa de homicidios de 2003-2015 por cada 1,000 habitantes.....	18

LISTA DE ABREVIACIONES

CEDE	Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
FARC	Fuerzas Revolucionarias de Colombia
JT	Justicia transicional
LAPOP	Latin American Public Opinion Project
M-19	Movimiento 19 de abril
PRT	Partido Revolucionario de Trabajadores

Introducción

Un conflicto civil trastoca de manera profunda a las comunidades y su vida diaria. La violencia no solo tiene impacto en la vida de las personas, sino que también cambia la manera en la que sus miembros se relacionan con los grupos armados y su entendimiento de la violencia y la justicia. Al término del conflicto, estas experiencias y reconfiguraciones permean las preferencias y perspectivas de los ciudadanos, mismas que se cristalizan una vez que la sociedad se dispone a reconstruirse y a potencialmente renovar su realidad. Es en esta coyuntura en la que se inserta la justicia transicional.

La justicia transicional (JT) es definida como:

[...] un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. La aplicación de la JT busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional (Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE] y Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2018).

Las herramientas más comunes de estos procesos son: comisiones de la verdad, reparaciones, amnistías, procedimientos de responsabilidad penal individual y procesos de investigación de antecedentes (CNDH y CIDE, 2018). El mayor reto que presenta la implementación de estos mecanismos es que no solo debe contemplar medidas jurídicas, sino que debe buscar tener un efecto en la mentalidad del pueblo afectado para interiorizar cambios sociales (Reed, 2009) que faciliten la reconstrucción de la confianza dentro de comunidades azotadas por olas de violencia masiva.

La construcción de paz con la presencia de grupos armados aún dispuestos a alcanzar sus objetivos mediante la violencia impone un reto mayúsculo para hacer que la transición a una sociedad post-conflicto sea viable y/o sostenible (Barnes, 2006). Aunado a esto, dado que el uso de tácticas no convencionales en la guerra ha aumentado, el costo del conflicto para la población civil, al generar afectaciones directas sobre ésta, también es mayor. El resultado es que no sea solo una élite la que tenga interés en terminar el conflicto, sino que ahora son la mayoría de los ciudadanos los que buscan contribuir con su terminación (Barnes, 2006). En este sentido, el papel de la población es clave para alcanzar la paz, ya que ésta no solo influye en impulsar las medidas a nivel local para disminuir la resistencia, sino que son un actor útil para los negociadores: ayudan a señalar problemas ignorados por los diseñadores de políticas y a llenar

huecos en la construcción de políticas pro-paz (Barnes, 2006). Sin embargo, usualmente, estos actores son relegados a segundo plano en la parte de diseño e implementación de las políticas para la construcción de paz porque la parte “política” como tal no puede ser ignorada (Aguilar, 2010) y los procesos tienden a ser politizados.

Dado lo complicado que es transitar a sociedades post-conflicto con medidas de JT ampliamente apoyadas y promovidas por la población en general en ambientes con violencia y tensiones aún en curso, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿qué determina la preferencia por unos mecanismos de JT sobre otros? La relevancia de estudiar a la opinión pública sobre la JT radica en que, desde que surge el acuerdo de crear procesos de JT con centralidad de la víctima —es decir, que tengan el propósito de empoderar a las víctimas y ayudarlas a superar el pasado, más que enfocarse en cómo castigar a los perpetradores—, ha sido notorio que, incluso si la decisión y los procesos no necesariamente involucran a todos los ciudadanos, las víctimas y las no-víctimas desempeñan un papel clave en el correcto desarrollo de las lógicas de paz en sociedades post-conflicto (Trejo et al., 2018; Voors et al., 2012; Nussio et al., 2015). Sin consenso, no hay base local para profundizar en procesos de verdad y justicia que ayuden a las personas a transitar a sociedades post-conflicto, por lo que no entender a la opinión pública puede obstaculizar la paz y alimentar las tensiones. Es cierto que la decisión y los procesos no necesariamente influyen en el público en general; sin embargo, es importante entender qué forma sus preferencias dado que, sean víctimas directas o no, su ambiente sí cambia en estos contextos y también tienen algo que decir.

Para contestar a la pregunta planteada se examina el caso colombiano porque, al ser una guerra civil no convencional que inició desde 1964, el conflicto ha trastocado de diversas formas a la mayoría de la población. Aunado a esto, es un proceso que ha tenido una carga política marcada que interactúa con grandes grupos armados (paramilitares y guerrillas). En este sentido, se espera que las preferencias en el caso colombiano no dependan de clivajes étnicos —porque no los hay— como ha sido el caso de países como Burundi y Ruanda, sino que el nivel de violencia en el que se desarrolla el individuo afecte sus preferencias sobre el proceso de JT.

El argumento principal del presente trabajo es que el nivel de violencia en el municipio influye en el individuo y afecta sus preferencias, lo cual conduce a una demanda por JT, sin importar si son víctimas o no. La expectativa es que, a mayores niveles de violencia, las exigencias por medidas de justicia retributiva serán mayores que las demandas por medidas de

justicia restaurativa. Como ya fue mencionado, se espera que la identidad de víctima no sea decisiva, pero sí se espera que las víctimas en contextos con violencia alta tengan preferencias más fuertes que las de las víctimas que se encuentran en municipios con violencia baja. No obstante, los hallazgos muestran que el nivel de violencia y la victimización no son variables explicativas constantes para las preferencias de los individuos por distintos tipos de mecanismos de JT: dado que la violencia continúa, las preferencias siguen actualizándose. La evidencia empírica sugiere que factores como el partidismo y la relación con los grupos armados podrían tener un papel más importante del que se les suele atribuir en la definición de preferencias por medidas de JT.

Para contestar a la pregunta de investigación, la tesina contará con siete secciones. En la primera, se presenta una revisión de literatura sobre lo que hasta ahora se sabe sobre el papel de la opinión pública en los procesos de JT. En la segunda sección, con base en los hallazgos sobre la JT y la opinión pública y aquellos de la literatura sobre comportamiento individual en contextos de violencia, se plantean el argumento y las hipótesis de este trabajo. En el tercer segmento se expone una breve explicación del conflicto en Colombia y cómo se llegó ahí a diseñar un proceso de paz con medidas de JT como una posible salida de la guerra civil. En la cuarta sección se presenta la estrategia empírica para evaluar el argumento y las hipótesis, y en la quinta se presentan los resultados. En el sexto apartado de la tesina se discuten los hallazgos y, finalmente, en la séptima sección se explican las implicaciones de los hallazgos, las limitaciones de la estrategia empírica y futuras áreas de investigación.

I. ¿Qué sabemos sobre la JT en la opinión pública?

Preocupados por entender el apoyo que subyace detrás de los mecanismos de JT y el posible papel que tales preferencias pueden tener en una implementación exitosa de los mismos, la literatura reciente ha explorado los factores individuales y contextuales que afectan el apoyo a los procesos de JT. Respecto a los factores individuales, está el supuesto de que es necesario darle voz a las víctimas para que el proceso pueda ser justo y cumpla con la narrativa de integración (Guembe y Olea, 2006). Debido a esto, la mayoría de los estudios empíricos parten de la victimización como la identidad individual más relevante en la definición de preferencias en contextos de conflicto y post-conflicto (Nussio et al., 2015; Gibson, 2009; Pham et al., 2007). La explicación que Liendo y Braithwaite (2018) ofrecen para poner a las víctimas en el centro

del debate es que tienen un papel crucial en legitimar y apoyar los esfuerzos del régimen por terminar el conflicto dado que son los actores más afectados. Bajo esta lógica de dicotomía entre víctimas y no-víctimas, Aguilar et al. (2011) encuentran que la victimización es crucial: las experiencias individuales y familiares en España, sobre todo las traumáticas, son fuertes determinantes de las actitudes y posiciones políticas. Por su parte, Gibson (2009) y Pham et al. (2007) apoyan el papel prominente de este clivaje, ya que sus hallazgos muestran que en Sudáfrica y en el Norte de Uganda la reparación a través del otorgamiento de hectáreas de tierra es vista como una forma de reparación para la población negra, pero no para los blancos, porque una forma de victimización consistió en quitarle sus tierras a la población negra. En la misma línea, examinando el caso de Burundi, Samii (2013) encuentra que hay una tendencia a favorecer perdonar y olvidar, sobre castigar y buscar la verdad, entre las víctimas, pero que esto no se replica entre los Tutsis (no-víctimas).

Si bien la identidad de víctima ha permeado como la identidad clave para entender las percepciones respecto a la JT, Nussio et al. (2015) encuentran que las víctimas y no-víctimas del conflicto armado de Colombia *no* difieren en sus opiniones respecto a los mecanismos de JT. Los autores argumentan que, dado que el conflicto colombiano ha tenido una larga duración, generando afectaciones amplias –de manera directa e indirecta– y que en el proceso se han generado esfuerzos de resiliencia y proximidad amplia entre grupos sociales, la identidad de la víctima se desdibuja. Lo que este último hallazgo parece mostrar es que no hay evidencia suficiente para sostener que la identidad de víctima por sí misma es lo que explica el apoyo a JT en conflictos no-étnicos (como son el caso de Burundi, Sudáfrica y Uganda del Norte). Por lo tanto, es necesario no delimitar los estudios a la dicotomía entre víctimas y no-víctimas para considerar el contexto mismo en que tales experiencias con la violencia se generan y que podrían ser lo que realmente define las preferencias sobre mecanismos de JT.

En este sentido, es preciso reflexionar sobre el contexto de violencia en el que las preferencias se generan o se transforman. Es innegable que la victimización es relevante; sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta identidad está en interacción con un contexto más amplio, a veces con violencia aún en curso. Las víctimas son producto de contextos particulares de violencia donde los actores son múltiples y las formas de victimización también. Una parte de la literatura que estudia el nivel contextual se ha enfocado en la intensidad de la violencia y su efecto en las preferencias respecto a la JT. Este acercamiento parte de una línea más amplia

de investigación dentro del estudio de la opinión pública en la que se ha demostrado que los conflictos tienen efecto en las preferencias de los individuos (Voors et al., 2012). No solo importa la intensidad de la violencia por el margen de acción que dan a los individuos (Weintraub et al., 2015), sino que también los tipos de agresores, su control y su relación con la población determinan las preferencias de los individuos sobre procesos de JT porque sus interacciones y experiencias con la violencia terminan definiendo cómo fueron afectados y cómo perciben a los grupos armados con los que coexisten (Arjona, 2017).

Además, es importante recalcar que la violencia no solo cambia el comportamiento de los individuos, sino que también impacta en su cosmovisión. Un factor que ha mostrado ser decisivo es que las experiencias con la violencia definen las percepciones y definiciones mismas de justicia. En Bosnia, Hall et al. (2017) encontraron que las experiencias pasadas de violencia e interdependencia con los perpetradores en el día a día definen si hay más o menos apoyo por medidas de justicia restaurativa (amnistías, comisiones de la verdad, perdón, etc.) o retributiva (juicios penales). La lógica detrás de estos hallazgos es que convivir con los perpetradores lleva a las personas a verlos como humanos y no solo como criminales, por lo que están dispuestos a implementar medidas para convivir pacíficamente. Esto llevaría a considerar que, igualmente, las preferencias por procesos de JT son afectadas y moldeadas por estas dinámicas locales, pero ésta es una relación que todavía no ha sido tan explorada.

A partir de estos hallazgos, es posible observar que los estudios sobre los determinantes de las preferencias sobre mecanismos de JT tienden a enfocarse en un nivel u otro—ya sea las identidades individuales o el contexto— y que los estudios multinivel son aún incipientes y están relacionados a resultados de procesos electorales (Ley, 2017; García, 2016; Liendo y Braithwaite, 2018). Lo que esto ha generado es que, cuando se estudia el contexto, contrario a lo que la literatura sobre determinantes de opinión pública ha señalado (Campbell et al., 1960), se tiende a hacerlo a nivel agregado sin ver su efecto sobre el nivel individual (Branton et al., 2019; Taylor, 2015; Dávalos et al., 2018; Weintraub et al., 2015; Newman, 2012). En suma, lo que esta revisión de literatura revela es que hace falta un entendimiento más profundo del contexto de violencia en el que las relaciones entre individuos y perpetradores es una característica de la vida cotidiana para poder entender qué determina las preferencias en materia de JT.

II. Otra aproximación al estudio de las preferencias por mecanismos de JT

La violencia es solo una de las distintas herramientas que los actores armados en conflicto tienen a su alcance para ejercer control sobre la población cuando establecen monopolios territoriales. Aunque normalmente la gente piensa que la guerra civil es una forma de estado de naturaleza en donde el desorden es lo común, en realidad lo que se observa es que hay orden dentro de los territorios tomados (Arjona, 2010). En este contexto, como ya fue mencionado, no solo es relevante la intensidad de la violencia, sino que el tipo de agresores, su control y su relación con la población también moldean al individuo. Como Arjona (2010) enfatiza, hay variaciones en el orden social que implementa cada grupo armado sobre el territorio que controla y la reacción de la población, por lo que el tipo de gobierno que estos grupos instauran define la experiencia de cada individuo. Bajo esta lógica, el análisis de García (2016) sobre el efecto del contexto en las preferencias electorales muestra que el uso de la violencia por parte de un actor armado dominante tiene la capacidad de moldear el comportamiento político de los individuos, alterando el valor esperado de ciertas acciones políticas. No obstante, lo que una parte de esta literatura enfatiza es que tampoco es posible esperar que los individuos sean pasivos frente a niveles de violencia muy altos. Por ejemplo, Weintraub et al. (2015) sugieren una relación no lineal entre violencia y apoyo para la paz, esperando mayor demanda por militarización en niveles altos y muy bajos de violencia, y apoyo a negociaciones en niveles medios de violencia.

Aunado a esto, sabemos que el contexto transforma las percepciones y el comportamiento de los individuos (Altamirano, 2015; Ley, 2017; De Graaf et al., 1995; Voors et al., 2012) y que los entornos violentos en particular afectan las percepciones respecto a los actores que generan la violencia (Moncada, 2019; García, 2016) y las preferencias sobre política pública (Krause, 2014; Holland, 2018; Visconti, 2019; Altamirano et al., 2020). En este sentido, la violencia del conflicto armado tiene la capacidad de afectar la visión sobre los mecanismos de JT. Como Moncada (2019) encuentra, los individuos ejercen agencia cuando hay interdependencia con perpetradores, la coerción es alta y la presencia del Estado es débil o nula. La expectativa, por lo tanto, es que estas interacciones individuales con agresores y el entorno van a definir qué medidas apoyen las personas en el momento de post-conflicto.

Con esto en mente, es relevante retomar la división que Hall et al. (2017) hacen en su trabajo entre medidas de justicia restaurativas (reparaciones, conmemoración y revelar la verdad) y retributivas (juicios penales). Mientras las primeras suponen una lógica de perdón y olvido, las segundas implican medidas más duras contra los perpetradores. Su argumento es que presenciar o experimentar crímenes de guerra aumenta la demanda por medidas retributivas, mientras que la interdependencia con los perpetradores aumenta la demanda por justicia restaurativa. Los autores dividen a la justicia en estos dos grupos porque argumentan que las expectativas que los individuos tienen de la JT no son solo retrospectivas, sino que están determinadas por el nivel de interdependencia que existe entre víctimas y perpetradores, por lo que hay comunidades enteras en las que se crea una cultura de victimización que opta por medidas retributivas.

Así, en los territorios en los que los grupos armados instauraron un gobierno coercitivo y generaron mayores niveles de violencia, los individuos expresarán preferencia por el castigo. No obstante, dentro de la lógica detrás de los conflictos armados, también hay grupos insurgentes que son menos violentos e incluso proveen bienes a las comunidades donde operan. La expectativa es que éstos podrían estimular preferencias por medidas restaurativas, como las amnistías. Lo que Arjona (2010) señala en su trabajo es que lo que define las interacciones y las demandas post-conflicto son el tipo de orden social impuesto por el grupo armado, mismo que se da una vez que el territorio deja de estar en disputa (Kalyvas, 2006).

Lo que esto parece señalar es que hay un mecanismo emocional detrás de cómo se definen las preferencias: las emociones negativas se dan cuando las personas se identifican con las víctimas (Elster, 2004) y esto los lleva a demandar medidas de justicia retributiva. Esto puede ser porque viven bajo un régimen de control coercitivo (mucha violencia) o porque fueron víctimas. Por el contrario, las emociones positivas que llevan a las personas a que se identifiquen con los perpetradores (Elster, 2004), hacen que la demanda sea por medidas de justicia restaurativa. Es decir, la posibilidad de perdón y olvido se espera de las personas que viven bajo un régimen no violento o que no sienten culpa de ser “espectadores.”¹ Quienes son victimizadas directa o indirectamente, conocerán la destructividad de la violencia y querrán evitar su perpetuación como venganza o castigo. A partir de estos hallazgos, surge la siguiente hipótesis:

¹ Elster (2004) se refiere a los *bystanders* (“espectadores”) como un grupo de personas que no sufrieron alguna forma de victimización ni fueron perpetradores, pero que generalmente siente culpa por no haber intervenido.

H1: A mayor nivel de violencia en el municipio, mayor (menor) probabilidad de que los individuos apoyen mecanismos de JT de tipo retributivo (restaurativo).

Ahora, no se debe olvidar que el contexto importa y las preferencias no solo están en función de su victimización. La relación que los individuos entablan con el grupo armado que haya tomado el territorio y ser víctima no dejan de ser categorías relevantes. El argumento general de Arjona (2010) es que la victimización es el aspecto más importante de la participación de los civiles en la guerra desde el punto de vista de la JT, pero que otros fenómenos que tienen lugar durante la guerra también pueden afectar a los civiles de maneras profundas. Una realidad innegable es que las víctimas tienen que absorber costos extra: no solo interactúan en su día a día con agentes que presentan una amenaza directa a su integridad física, sino que tienen que hacerlo mientras soportan la falta de justicia y aprenden a ejercer agencia (Moncada, 2019). En línea con esta condición contextual, diversos estudios han encontrado que las víctimas tienden a presentar cambios en su comportamiento (O'Donnell, 1993; Moser y Mellwaine, 2004; Voors et al. 2012; Bateson, 2012).

Como ya fue mencionado, Nussio et al. (2015) no encuentran diferencias entre víctimas y no-víctimas. No obstante, puede ser que esto se deba a que analizan esta dicotomía como un fenómeno independiente a la violencia; es decir, controlan por la violencia contextual, pero no observan cómo es la relación entre ser víctima en un municipio con violencia alta. Es un hecho que el contexto define en gran medida el apoyo a distintos mecanismos y la experiencia de victimización potencia ese efecto; sin embargo, las no-víctimas también tienen algo que decir en este proceso. Tal vez esto puede iluminar la falta de hallazgos tan claros sobre la variable de víctima como la explicación o factor explicativo único en conflictos no-étnicos (Nussio et al., 2015). Sin embargo, una realidad es que cuando hay una victimización directa, las personas pueden sentir rabia y deseo de venganza, o la necesidad de evitar una re-victimización, por lo cual apoyarán el castigo. En este sentido, la expectativa es que la victimización puede tener un papel importante en la definición de preferencias al interactuar con la violencia en la que tales experiencias directas de victimización se desarrollan. Así, surge la siguiente hipótesis:

H2: A mayor nivel de violencia en el municipio, las víctimas tienen mayor (menor) probabilidad de apoyar mecanismos de JT de tipo retributivo (restaurativo) que los individuos que no han padecido victimización directa.

La lógica detrás de estas hipótesis es que la violencia contextual alta implica control despótico o disputa por el territorio, por lo que las personas van a preferir medidas de justicia retributiva, mientras que bajos niveles de violencia implican control social organizado, por lo que las personas van a preferir medidas de justicia restaurativa. La expectativa es que esta relación se acentúe cuando la victimización sea interactuada con la violencia contextual porque las víctimas tienen mayores costos que las no-víctimas si la violencia sigue en niveles altos (Moncada, 2019; García, 2016). Estas reacciones, a su vez, son producto de una dicotomía en las emociones que el conflicto armado genera a nivel individual: positivas o negativas. Aunque las hipótesis sobre las emociones no serán evaluadas, este mecanismo causal ayuda a entender por qué la victimización no necesariamente es una variable explicativa, pero sí relevante, y por qué es necesario entender las preferencias por distintos mecanismos de JT con estos lentes.

En este sentido, el argumento principal de la tesina es que el nivel de violencia en el municipio permea en el individuo y afecta sus decisiones y preferencias, lo cual conduce a una demanda por JT según experiencias individuales con la violencia sin importar si son víctimas o no. La expectativa es que la victimización acentúe estas relaciones, pero no que necesariamente difieran de lo que las no-víctimas exigen de los procesos de JT. El mecanismo causal, por lo tanto, nos llevaría a esperar lo siguiente: quien es testigo de la violencia (porque su municipio ha sido violento históricamente) tiene sentimientos de rabia o indignación y una consecuente demanda de castigo (H1); sin embargo, posiblemente estas demandas serán más fuertes que las de las víctimas, para quienes un entorno violento potencia tales emociones y preferencias retributivas (H2).

Estas hipótesis serán evaluadas en el caso colombiano porque, al ser una guerra civil no convencional que inició hace poco más de 50 años, el conflicto ha modificado la manera en la que la mayoría de la población entiende la violencia y la justicia. Además, dado que distintos grupos armados han tomado distintos municipios, hay variación no solo en el nivel de violencia, sino en las relaciones entre los grupos armados y la sociedad. Y, finalmente, permite observar cómo la violencia generalizada permea en las identidades de víctima y no-víctima.

III. Sobre la experiencia colombiana con la violencia y la justicia transicional

III.1. El conflicto colombiano

Como ya fue mencionado, desde hace más de 50 años Colombia se ha enfrentado a un conflicto armado que ha sido catalogado como una guerra civil irregular; es decir, no hay lugares para guerra definidos y coexisten áreas con control total y control fragmentado que diferentes grupos armados deben compartir con sus rivales (Kalyvas, 2006). Debido a esta falta de lugares determinados para el combate, el conflicto ha atravesado a la sociedad colombiana en todas sus dimensiones (social, económica y política) no solo por su duración, sino porque éste es la pugna entre grupos armados con fines políticos (los paramilitares y las guerrillas) que han recurrido al tráfico de drogas como una forma de financiamiento (Guembe y Olea, 2006).

Frente a la crisis de seguridad y de violación de derechos humanos masiva que resultó de las dinámicas de violencia generadas por estos múltiples grupos, el gobierno colombiano comenzó negociaciones intermitentes, con periodos de intervención militar, con estos grupos desde 1986. La primera estrategia contemplaba medidas de justicia y fortalecimiento del ejército para eventualmente mantener negociaciones de paz con grupos armados debilitados. Sin embargo, debido a las amenazas constantes que el gobierno de Virgilio Barco recibió por parte de narcotraficantes, éste declaró una guerra total contra el narcotráfico, generando que la pacificación y la desmovilización de los grupos armados pasara a segundo plano (Orlando, 2017). Fue hasta 1988 que el gobierno reabrió conversaciones con las guerrillas, pero solo los grupos relativamente débiles (M-19, EPL, PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame) firmaron, pues las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaban más fuertes que nunca (Orlando, 2017).

Las negociaciones comenzaron de nuevo en 1999 con Andrés Pastrana, pero las FARC continuaron radicalizando su uso de la fuerza y suspendieron las negociaciones en 2002 (Orlando, 2017). Esto desembocó en la victoria electoral de Álvaro Uribe, quien ganó con el mandato simple de terminar con la guerrilla y con los paramilitares: se cerró un ciclo de negociaciones que duró 20 años (Orlando, 2017). La fuerte estrategia militar de Uribe orilló a las FARC y las arrinconó en zonas remotas y fronterizas; sin embargo, esto no ocurrió sin graves violaciones a derechos humanos (Orlando, 2017). Esta estrategia, con el apoyo del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, desembocó en que cerca de 30 oficiales fueran destituidos por

ser posibles responsables de excesos del gobierno en estos enfrentamientos, como los falsos positivos² (Orlando, 2017). Aunado a esto, en 2002, el gobierno había ofrecido un tratamiento judicial favorable a grupos armados que se desmovilizaran, mismo que llevó a un acuerdo de paz con los paramilitares en 2003 y una desmovilización entre 2003 y 2005: los jefes recibieron condenas de prisión breves y entregaron las armas (Orlando, 2017). Sin embargo, las FARC seguían movilizadas y los territorios que fueron ocupados por los paramilitares durante el conflicto quedaron en manos de sus aliados (Orlando, 2017).

III.2. De la justicia transicional en Colombia

Después de la crisis de legitimidad de las FARC, en 2010 resultó electo el exministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, quien proponía detener la estrategia militar y optar por reanudar las negociaciones con las FARC (Orlando, 2017). Finalmente, después de 5 años de conversaciones, en el 2016, el gobierno y las FARC firmaron acuerdos de paz que incluían medidas de JT que permitían sancionar a guerrilleros de forma que se respondiera a exigencias internacionales mientras se quedaban con un margen de acción política (Orlando, 2017). No obstante, en ese mismo año, los acuerdos fueron refrendados para incluir a la sociedad en la toma de decisiones y, en línea con la campaña encabezada por Uribe, ganó el “no”. Lo que la mayoría objetaba era el sistema de JT, el cual permitía que los guerrilleros que confesaran sus crímenes recibieran una amnistía y conservaran la posibilidad de acceder al Congreso (Orlando, 2017).

Si bien los acuerdos también contemplaban el establecimiento de una comisión de la verdad, la mayoría no corría riesgo de ir a prisión bajo los términos establecidos, pues solo los crímenes más serios serían sujetos a persecución y prisión (Felter y Renwick, 2017). Debido a esto, se ha estudiado por qué ganó el “no” en el referendo y se han dado explicaciones contextuales e individuales (Dávalos et al., 2018; DeMeritt et al., 2019; Liendo y Braithwaite, 2018), pero no se ha hecho un análisis riguroso de las determinantes de las preferencias respecto a los mecanismos de JT que llevaron al fallo del referendo. Si algo está claro es que la sociedad no estaba en contra de la paz, sino de los términos de la misma. Es en este contexto en el que se inserta el presente trabajo y por lo cual el caso colombiano es ideal para probar las hipótesis. No

² Muertes de civiles que el gobierno de Uribe quería catalogar como muertes de miembros de grupos armados durante combate (Orlando, 2017).

solo es útil que no fue un conflicto étnico, sino que su largo alcance y variación en los niveles de violencia a través del territorio han impulsado diferentes relaciones y permite tener variación entre municipios y a nivel individual. Además, es un proceso de JT enmarcado en las limitaciones de una transición a la paz que pretendía forzar el término de la violencia y que ha tenido una carga política marcada que interactúa con las dinámicas todavía en vigor de los grupos armados (paramilitares y guerrillas). Sin embargo, la expectativa es que la formación de las preferencias sobre el proceso de JT en el caso colombiano dependan, sobre todo, del nivel de violencia porque ésta es la característica contextual común que afecta transversalmente todas las áreas de la vida de los colombianos.

IV. Diseño de investigación para la evaluación del efecto de la violencia en las preferencias individuales de JT en Colombia

Para responder a la pregunta de investigación se harán modelos multinivel lineales, también conocido como jerárquicos. La razón por la que fueron elegidos estos modelos para responder a la pregunta de investigación es porque permiten trabajar con estructuras de datos anidados (Peugh, 2010); en este caso, personas anidadas en un municipio. Dado esto, utilizar regresiones múltiples por mínimos cuadrados ordinarios no sería lo correcto porque los datos anidados violan el supuesto de independencia y producen errores excesivos de tipo I y estimaciones de parámetros sesgados (Peugh, 2010). Los dos niveles interdependientes de este estudio son el individual y el municipal.

Dada la naturaleza de las hipótesis, se usan datos de encuesta que provienen del *Latin American Public Opinion Project* (LAPOP), uno de los instrumentos más completos y ambiciosos para el análisis de la opinión pública en América Latina. Además, se utilizan dos años de levantamientos de LAPOP en Colombia: 2013 y 2016³. Estos años son relevantes y útiles para el análisis del caso colombiano y las hipótesis presentadas debido a que en 2013 ya habían comenzado las negociaciones con las FARC, pero el debate todavía no se había politizado; y en 2016 fue el referendo de los acuerdos de paz después de años intensos de politización de los términos de la paz negociada. Si bien este trabajo no versa en torno a los aspectos de politización, una evaluación estricta del argumento planteado sobre el papel de las

³ Ambos levantamientos son de libre acceso y pueden encontrarse en la siguiente liga: <http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true>

experiencias de victimización y violencia contextual en las preferencias por JT debe tomar en cuenta tales procesos políticos y la selección de estos dos años para el análisis permite hacer tal evaluación. Además, en términos de JT, este periodo es iluminador porque ya se había aprobado la Ley de Víctimas y Restitución de la Tierra (No. 1448)⁴ (Nussio et al., 2015); las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC ya eran públicas, y permite observar aprobación por medidas de JT definidas en términos generales (2013) y aprobación por medidas acotadas dentro de lo ya acordado (2016).

Para medir violencia serán utilizados los datos del Panel de Violencia y Conflicto del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE) para extraer la tasa de desplazados y la de homicidios del 2003 al 2012⁵ para las regresiones con las preguntas de LAPOP 2013, y las de 2003 a 2015 para LAPOP 2016. Ahora, estos datos son parte del Panel de Conflicto y Violencia, el cual incluye datos de 1993 a 2018; no obstante, se eligió el periodo de tiempo señalado por tres razones. La primera es que, contrario al trabajo de Nussio et al. (2015), no se toman años previos porque, como Elster (2004) señala, la memoria, y por lo tanto las emociones, decaen con el tiempo. Por lo tanto, si la violencia fue alta en el pasado, no sería de esperarse que tenga efecto en las preferencias de las personas en el momento del levantamiento de la encuesta. La segunda es que se usan las cifras agregadas (no solo 2012 o solo 2015) porque el conflicto en Colombia ha durado tanto y ha sido de tan largo alcance que la expectativa es que sea la convivencia con la violencia en un periodo largo de tiempo lo que define las preferencias. Y, finalmente, dado que los paramilitares comenzaron a desmovilizarse en el 2003, ver este periodo de tiempo permite controlar, hasta cierto punto, por violencia generada exclusivamente por las FARC.

Con estos datos, se estimarán cuatro modelos multinivel lineales para 2013 y cuatro para 2016: uno para justicia retributiva (castigo) y tres para justicia restaurativa (conmemoración, verdad y reparaciones). A continuación, se describe la operacionalización de las variables dependientes, las independientes y los controles.

⁴ Fue aprobada en 2011 para reforzar la atención a las víctimas. Con base en esta ley se creó la Unidad de Víctimas, la cual contaba con un presupuesto del 1% del PIB del 2012 y estaba diseñada para registrar y reparar a aproximadamente 6 millones de personas (Nussio et al., 2015).

⁵ El acceso a esta base de datos es restringido, pero puede solicitarse en la siguiente liga: <https://datoscede.uniandes.edu.co/es/catalogo-de-microdata>

IV.1. Variables dependientes

A partir del levantamiento de la encuesta de LAPOP 2013 y 2016 se eligieron cuatro variables que miden el apoyo a distintos mecanismos de justicia transicional. Dado que la justicia *retributiva* hace alusión a medidas más fuertes contra los perpetradores, generalmente se mide con la preferencia por someter a los perpetradores a juicios penales. Respecto a la justicia *restaurativa*, dado que ésta se refiere a mecanismos que siguen una lógica de perdón y olvido, los mecanismos con los que se identifica son normalmente las amnistías, las comisiones de la verdad, las conmemoraciones, el perdón y las reparaciones económicas. Con esto en mente, se utilizan las preguntas señaladas a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1: Fraseo de variables dependientes en LAPOP 2013 y 2016

	Retributiva	Restaurativa
LAPOP 2013	“Los miembros de grupos guerrilleros (FARC) que confiesen sus crímenes no deben ser castigados. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”	<p>“Reparar a las víctimas de las FARC contribuiría para la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p> <p>“Recordar públicamente los crímenes cometidos por las FARC contribuiría a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p> <p>“El establecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por las FARC contribuiría a la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p>
LAPOP 2016	“Se acordó que los miembros rasos de las FARC (no comandantes) que se desmovilicen no irán a la cárcel. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”	<p>“Que las FARC reparen económicamente a sus víctimas contribuirá a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p> <p>“Recordar públicamente los crímenes cometidos por los miembros de las FARC contribuirán a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p> <p>“Que se establezca la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado contribuirán a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”</p>

Fuente: LAPOP (2013) y LAPOP (2016).

Las respuestas a estas variables varían del 1 al 7, en donde 1 es “muy en desacuerdo” y 7 es “muy de acuerdo.” Para hacer el análisis más intuitivo, se revirtió la escala para la variable de castigo; es decir, el 7 ahora equivale a estar en desacuerdo con perdonar a los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes. Las preguntas para 2013 y 2016 no son idénticas, pero son lo suficientemente parecidas como para que los datos sean comparables. Y, además de ser útiles por la similitud, también lo son porque presentan las mismas limitaciones.

Sobre la pregunta de justicia retributiva, el problema con ambas es que están condicionadas. En 2013 requiere de una confesión y en 2016 exige la desmovilización y que sean miembros rasos. Sin embargo, esto podría ser positivo para medir actitudes punitivas porque cuestiona si, a pesar de las atenuantes, siguen en desacuerdo con que *no* sean castigados. Ahora bien, sobre las preguntas que conciernen a la justicia restaurativa, el fraseo es distinto, pero las implicaciones se mantienen. La limitante de estas preguntas es que están enmarcadas en términos de reconciliación. Es decir, no es claro si el encuestado está en contra de la medida *per se* o si está en desacuerdo con que esa acción llevará a la reconciliación. A pesar de esto, las preguntas son una manera viable de medir las preferencias por medidas de JT en el proceso de paz colombiano. Aunque la encuesta enmarca las preguntas bajo la lógica de “reconciliación,” éste es justo el propósito de la justicia restaurativa, por lo que el mecanismo causal se mantiene.

IV.2. Variables independientes

Respecto a las variables independientes de interés, éstas se miden con dos variables sobre violencia contextual y una sobre victimización. A continuación, explico la operacionalización utilizada y la lógica detrás de cada medición.

IV.2.1. Violencia contextual

Las variables sobre violencia contextual refieren a la tasa de homicidio de 2003 a 2012, por municipio, que el CEDE recopiló a partir de los datos del Ministerio de Defensa, y la tasa de desplazados de 2003 a 2012, por municipio, que el CEDE obtuvo a partir de los datos del Registro Único de Víctimas. Se utilizarán los mismos datos para el análisis de la encuesta de LAPOP en 2016, pero el periodo de tiempo aquí es de 2003 a 2015.

Dado que éstos son datos contextuales, se hizo una fusión de datos m:1; es decir, a cada individuo se le agregaron los datos del municipio al que pertenece. Para probar el argumento,

se utiliza la tasa de desplazamiento de 2003 a 2012 como la variable contextual de referencia para el modelo central y se controla por ésta y por la tasa de homicidios porque éstos son dos de los efectos más notorios del conflicto en Colombia (Nussio et al., 2015).⁶ Es una realidad que el conflicto en Colombia se ha caracterizado por múltiples formas de victimización —tortura, delitos sexuales, secuestros y reclutamiento forzado también han caracterizado al conflicto (Nussio et al., 2015) —, pero el problema con éstos es que tienden a tener una tasa de denuncia muy baja. Por el contrario, en el caso de los desplazamientos, las personas se registran en el RUV y para los homicidios se cuenta con las actas de defunción. Entre ambas mediciones, se eligió la de desplazamiento como variable contextual de referencia porque en el caso de los homicidios está el problema del subregistro por las personas desaparecidas. Además, generalmente está el supuesto de que las personas desplazadas fueron sujetas a múltiples formas de victimización, por lo que es una medida que permite entender la violencia a nivel contextual de manera ampliamente entendida.⁷

La correlación entre ambas medidas de violencia es de 0.5, por lo que podría esperarse que, además de aumentar en la misma dirección, los municipios que tienen una tasa más alta de desplazamiento, también la tendrán en homicidios. Sobre la variación de los datos en los 1,123 municipios de Colombia, ésta se puede observar en las Tablas 2.1 y 2.2.

Tabla 2: Variación de la tasa de homicidios y de desplazamiento de 2003 a 2012 y de 2003 a 2015

Periodo	Tasa de homicidios				Tasa de desplazamiento			
	Mínimo	Promedio	Desviación estándar	Máximo	Mínimo	Promedio	Desviación estándar	Máximo
2003-2012	0	4.1	3.3	28.0	0	116.6	193.6	1,668.5
2003-2015	0	5.0	3.9	31.5	0	137.6	228.2	1,769.1

Fuente: CEDE (2019).

La distribución geográfica de la tasa de desplazamiento para el periodo de 2003 a 2012 puede observarse en el Mapa 1.1 y la de 2003 a 2015 en el Mapa 1.2. Para la tasa de homicidios, la distribución de 2003 a 2012 se encuentra en el Mapa 2.1 y la de 2003 a 2015 en el Mapa 2.2.

⁶ El modelo central utilizará los datos de violencia agregada, pero en los anexos serán presentadas las regresiones multinivel con los datos del 2012. Para ver la codificación ver Anexo 1 y para ver los modelos ver Anexo 3.

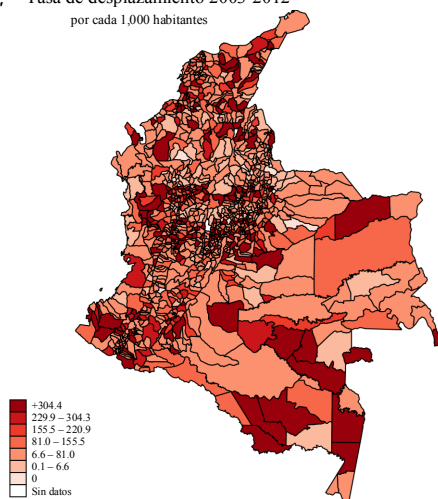
⁷ En los anexos serán probados los modelos con la tasa de homicidios de 2003 a 2012 como la variable contextual de referencia para observar si los hallazgos discutidos se mantienen. Para ver la codificación ver Anexo 1 y para ver los modelos ver Anexo 3.

En términos generales, estos mapas demuestran la amplia variación geográfica de la violencia en el territorio colombiano que, como se argumenta aquí, tiene un impacto diferenciado en las preferencias de JT de los individuos. Adicionalmente, muestran que la geografía de desplazamiento y homicidio no se traslapan por completo, por lo que, a pesar de representar las consecuencias más notorias de la violencia en Colombia, conviene considerar ambas variables como parte de las medidas para aproximarse a los efectos contextuales que se argumenta aquí. Como ya fue mencionado, un rasgo que hace que el conflicto colombiano sea ideal para estudiar las hipótesis es que el nivel de violencia tiene gran variación a lo largo del territorio, lo cual es visible en el Panel 1 y en el 2.

Panel 1

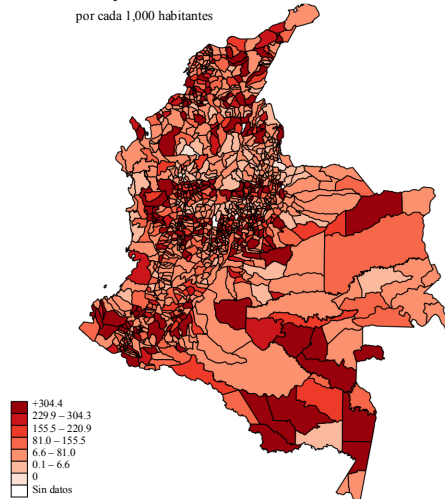
Mapa 1.1

Tasa de desplazamiento 2003-2012
por cada 1,000 habitantes



Mapa 1.2

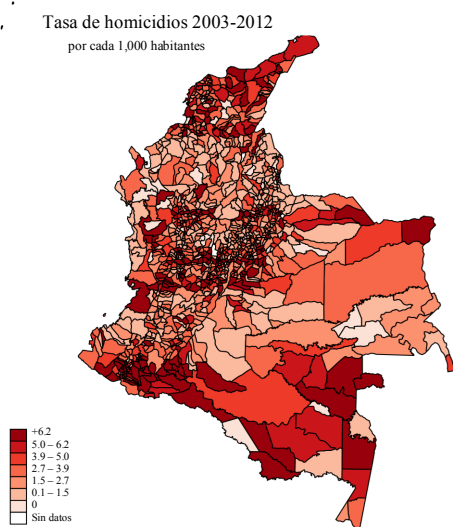
Tasa de desplazamiento 2003-2015
por cada 1,000 habitantes



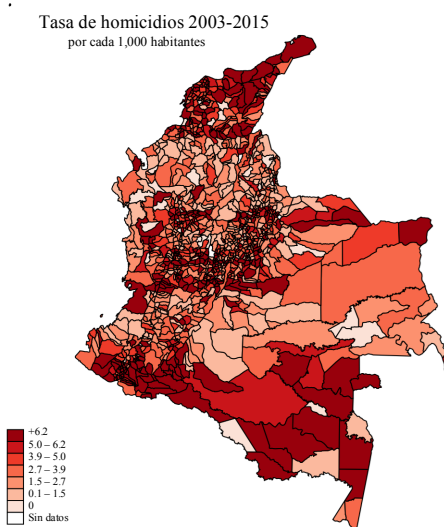
Fuente: CEDE (2019).

Panel 2

Mapa 2.1



Mapa 2.2



Fuente: CEDE (2019).

En ambas tasas, San José del Palmar y Vistahermosa ocupan lugares altos (dentro de los primeros 10). Fuera de esos dos municipios, hay variedad en el tipo de violencia que experimenta cada municipio en Colombia tanto en intensidad como en tipo de violencia más frecuente.⁸

IV.2.2. Victimización

Siguiendo la hipótesis 2, una segunda variable explicativa se refiere a la victimización. Las preguntas sobre las que se construye esta variable son de LAPOP 2013 y 2016, y tienen respuestas que van del 1 al 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. En la variable dicotómica generada a partir de estas entradas de la encuesta, 0 es si el encuestado no reporta haber sufrido ninguna forma de victimización y 1 equivale a que reporte haber sufrido alguna de las formas de victimización por las que se le cuestiona. Las preguntas sobre las que se construye la variable dicotómica se presentan a continuación en la Tabla 3.

⁸ Los municipios con mayor violencia según ambos listados, excepto por Sucre y Calamar, coinciden con los municipios clasificados dentro de las Zonas Más Afectada por el Conflicto (Zomac) de acuerdo al estudio del gobierno colombiano para direccionar el apoyo según el daño que cada municipio sufrió durante el conflicto (Presidencia de la República, 2017).

Tabla 3: Fraseo de preguntas de LAPOP 2013 y 2016 utilizadas para la variable dicotómica de victimización

	2013	2016
Victimización	<p>“¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?”</p> <p>“¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?”</p> <p>“¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto que sufre el país?”</p> <p>“¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?”</p> <p>“¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?”</p> <p>"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue víctima de violencia sexual?"</p> <p>"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue víctima de una tortura?"</p> <p>"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue reclutado forzosamente?"</p>	<p>“¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?”</p> <p>“¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?”</p> <p>“¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto que sufre el país?”</p> <p>“¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?”</p> <p>“¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?”</p>

Fuente: LAPOP (2013) y LAPOP (2016).

Como ya fue se mencionó, el fraseo en ambos años es el mismo, en el 2016 fueron excluidas tres preguntas: la de tortura, la de reclutamiento forzado y la de violencia sexual. Independientemente de esto, el número de víctimas en 2013 y 2016 sigue siendo alto en ambos levantamientos y coincide, hasta cierto punto, con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2018).⁹ El porcentaje de víctimas y no-víctimas por año puede observarse en la Tabla 4.

Tabla 4: Porcentaje de víctimas y no-víctimas de la muestra de LAPOP de 2013 y 2016

Año	Victimización	Frecuencia	Porcentaje
2013	No-víctima	923	61.09%
	Víctima	588	38.91%
	Total 2013	1,511	100%
2016	No-víctima	972	62.19%
	Víctima	591	37.81%
	Total 2016	1,563	100%

Fuente: LAPOP (2013) y LAPOP (2016).

Sin embargo, esta variable requiere de mayores precisiones. Una es sobre el fraseo de la pregunta y la otra es metodológica. Sobre la redacción de la pregunta, ésta indaga sobre si un familiar cercano ha sufrido una forma dada de victimización. Esto genera el problema de que no es posible aproximar si el encuestado es víctima directa o indirecta. Empero, esto no es un obstáculo para la tesina por dos razones. La primera es que las preguntas se enfocan en “pariente cercano,” por lo que sí hablan de una victimización que no es ajena. Como Moncada (2019) señala, la victimización no se vive solo en lo individual; por el contrario, es una experiencia colectiva que afecta de manera diferenciada en lo individual. El segundo punto es que el fraseo de la pregunta tiene el propósito de disminuir la deseabilidad social. Dada la delicadeza de las preguntas, es de esperarse que preguntar por victimización directamente generaría un

⁹ En el documento referido, en la página 119, hay una tabla con el número de víctimas desagregado por hecho victimizante. Para corroborar que el porcentaje de víctimas de la muestra es representativo del contexto nacional, lo que se hizo fue sumar el número de personas que reportaron haber sufrido de despojo de tierra, delito sexual, desplazamiento, homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada y pérdida de propiedad porque estos son los delitos sobre los que LAPOP 2013 indaga. Esta suma fue dividida entre la población total y multiplicado por 100 para obtener la tasa de victimización. El resultado es de 20.31%, lo cual es una cifra cercana al número de víctimas de la muestra. La diferencia entre ambas se debe a que las cifras del Centro Nacional de Memoria son para el 2018 y a que LAPOP considera victimización dentro de la red cercana, mientras que el Centro Nacional de Memoria no.

subregistro mayor. En este sentido, las preguntas de victimización de LAPOP 2013 y 2016 permiten entender el fenómeno de victimización de manera amplia y compatible con el marco teórico

El segundo punto, el cual respecta al aspecto metodológico, es que LAPOP toma el municipio de residencia, no el del lugar donde se experimentó la violencia. Sin embargo, el lugar en donde viven actualmente probablemente les ayuda a actualizar sus aproximaciones al fenómeno de violencia y percepciones sobre los actores armados correspondientes porque al final, si el individuo se desplazó a otro lugar, ahí también interactuará y aprenderá de los procesos de su nueva ubicación para incorporarlos en su propio proceso. Las preferencias y experiencias individuales son cuestiones que no están fijas y son moldeadas por el entorno. Como García (2016) muestra, el dato del municipio de residencia importa como proxy del entorno y con efectos en comportamiento. Además, en 2013 solo 321 personas de 1,487 que fueron encuestadas reportaron haber sido desplazadas, y en 2016 fueron solo 374 personas de una muestra de 1,557. Además de que aquí podrían estar refiriendo a que un familiar fue desplazado, por lo que en esos números está sobreestimado el número de personas con probabilidad de tener un municipio diferente al de su victimización. En este sentido, sí sería útil saber en qué municipio las personas sufrieron de victimización, pero en realidad el marco teórico parte de individuos moldeados constantemente por su entorno; interdependencia que se enfatiza con el modelo multinivel.

IV.3. Controles

El análisis incluye diversos controles para identificar posibles “factores de confusión” y los controles sociodemográficos típicos. Siguiendo el trabajo de DeMeritt et al. (2019) se controla por zonas rurales porque las personas en estas zonas de Colombia fueron las más afectadas por el conflicto. Adicionalmente, siguiendo los hallazgos de Aguilar et al. (2011), se controla por edad. Su explicación sobre esta variable es que las personas más grandes vivieron los conflictos, mientras que los más jóvenes ya no fueron víctimas directas y están más dispuestos a adoptar medidas de JT en general (comisiones, juicios y simbólico). Siguiendo a los mismos autores (Aguilar et al., 2011) se controla también por el tamaño del municipio porque asumen que en municipalidades grandes el anonimato es mayor y los individuos no creen que sus preferencias puedan ser conocidas, mientras que en las pequeñas la política se torna personal, por lo que los

individuos pueden pensar que sus preferencias conocidas por las políticas de JT tendrán consecuencias específicas para su seguridad.

Ahora bien, de acuerdo al trabajo de Samuel (2011), dado que los términos de la paz están diseñados por hombres y para hombres, los discursos de la paz son más cercanos a la realidad de los hombres. En este sentido, y con el propósito de agregar una perspectiva de género, se controla por sexo. Asimismo, se introduce el control de religión, el cual tiene base en que David y Choi (2006 y 2009) encuentran que las creencias religiosas son factores explicativos muy significativos porque marcan la cosmovisión de las personas. Para el caso colombiano, siguiendo el trabajo de Nussio et al. (2015), se incluye un control para aquellos que declaran practicar el catolicismo. También se controla por educación porque Aguilar et al. (2011) encuentran que las personas más educadas son las que menos apoyan los procesos de JT porque es un indicativo de la sofisticación política de los individuos y, posiblemente, de su interés en la política.

Además, para el caso particular de Colombia, es relevante controlar por el partidismo porque, como Arjona (2016) menciona, muchos analistas vieron el voto del plebiscito como un referendo del liderazgo de Santos, más que como una cuestión entre paz y guerra. En el 2016, mientras la aprobación de Santos decrecía, Uribe era el líder de la campaña en contra del “no” en el plebiscito. Dado que el referendo fue politizado y en las elecciones del 2014 había un candidato con claro apoyo de Uribe (Óscar Iván Zuluaga), DeMeritt et al. (2019) señalan que es posible entender el proceso de paz a través del prisma del apoyo a Santos. En este sentido, se controla por el apoyo al partido Centro Democrático, liderado por Uribe, para ver si hay un cambio entre 2013 (cuando el proceso apenas comenzaba) y 2016 (momento en el que el proceso estaba altamente politizado). Además, respecto a la variable de situación económica egotrópica, esta variable está asociada a los hallazgos de Rettberg (2008), ya que cuando busca responder a la pregunta de qué quieren las víctimas del conflicto colombiano, encuentra que el factor más importante para las víctimas es la reparación económica porque, generalmente, las víctimas del conflicto son de estratos socioeconómicos bajos.

Finalmente, se controla por confianza en las FARC como una forma de probar las hipótesis de Arjona (2017). La expectativa es que, si las personas tienen confianza en las FARC, entonces van a preferir medidas de justicia restaurativa por la cercanía que tienen a este grupo armado. Asimismo, se controla por la confianza en las BACRIM porque Nussio et al. (2015)

señalan a este grupo como neo-paramilitares; es decir, se esperaría que los resultados sean el antónimo a los de la confianza en las FARC. Aunque ésta no es una manera exacta de probar los hallazgos de Arjona (2017), es una aproximación desde la opinión pública que puede arrojar hallazgos que apoyen sus hipótesis.¹⁰

V. Resultados

La Tabla 5 contiene las regresiones multinivel lineales por mecanismo para el 2013. La variable contextual de referencia en cada modelo es la tasa de desplazados de 2003 a 2012 y el término de interacción es entre ésta y la variable de victimización. El Modelo 1 es una aproximación a la aprobación de mecanismos de justicia retributiva. En éste, la variable dependiente corresponde a si el encuestado está de acuerdo o en desacuerdo con que los miembros de las FARC que confiesen sus delitos **no** deben ser castigados. Los modelos 2, 3 y 4 son una aproximación a la aprobación de medidas de justicia de tipo restaurativas. El Modelo 2 indaga sobre el nivel de acuerdo por las medidas de conmemoración; el Modelo 3, sobre las medidas de búsqueda de verdad y el Modelo 4 sobre las de reparación. Estos tres mecanismos son clasificados como medidas de justicia restaurativa porque están enmarcados en el acuerdo de que llevarán a que la reconciliación. De acuerdo a las hipótesis, dado que el primer modelo corresponde a una medida de justicia retributiva y los últimos tres a medidas de justicia restaurativa, el signo de las variables independientes de interés debe de ser positivo para el Modelo 1 y negativo para los demás: las personas que viven en municipios con niveles de violencia altos apoyan el castigo y desaprueban las medidas simbólicas.

¹⁰ La operacionalización a detalle de cada variable del 2013 puede ser consultada en el Anexo 1 y la de cada variable del 2016 en el Anexo 2.

Tabla 5: Efecto de la violencia en las preferencias individuales sobre mecanismos de JT en 2013¹¹

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Tasa de desplazados 2003-2012	0.000 [(0.000)]	-0.000*** [(0.000)]	-0.000 [(0.000)]	-0.000 [(0.000)]
Tasa de homicidios de 2003-2012	0.000 [(0.000)]	0.000 [(0.000)]	-0.000 [(0.000)]	0.000 [(0.000)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	-0.010 [(0.111)]	-0.101 [(0.123)]	0.078 [(0.127)]	0.148 [(0.132)]
Desplazados x victimización	-0.000 [(0.000)]	0.000 [(0.000)]	-0.000 [(0.000)]	-0.000 [(0.000)]
Confianza en las FARC	-0.255*** [(0.055)]	0.182*** [(0.060)]	0.087 [(0.062)]	0.082 [(0.064)]
Confianza en las BACRIM	-0.160*** [(0.061)]	0.081 [(0.067)]	0.040 [(0.069)]	-0.053 [(0.071)]
Centro democrático	-2.261*** [(0.595)]	1.122 [(0.655)]	-0.066 [(0.674)]	0.717 [(0.696)]
Sexo	0.203** [(0.091)]	-0.483*** [(0.101)]	-0.483*** [(0.105)]	-0.478*** [(0.107)]
Educación	0.313*** [(0.070)]	0.151 [(0.078)]	0.219*** [(0.081)]	0.382*** [(0.083)]
Edad	0.008** [(0.003)]	0.003 [(0.004)]	0.004 [(0.004)]	0.010** [(0.004)]
Católica	0.072 [(0.103)]	-0.179 [(0.114)]	-0.244** [(0.118)]	-0.538*** [(0.122)]
Situación económica	0.043 [(0.033)]	-0.033 [(0.037)]	-0.001 [(0.038)]	0.062 [(0.039)]
Tamaño del municipio	0.025 [(0.115)]	0.250** [(0.102)]	0.086 [(0.097)]	0.034 [(0.130)]
Rural/Urbano	0.117 [(0.136)]	-0.268 [(0.149)]	-0.309** [(0.153)]	-0.295 [(0.161)]
Constante	4.715*** [(0.429)]	2.466*** [(0.426)]	3.188*** [(0.424)]	3.715*** [(0.496)]
Observaciones	1,333	1,306	1,293	1,302
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).

¹¹ Los ejercicios de robustez de la Tabla 5 se encuentran en el Anexo 3. Lo que se puede apreciar en las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 de ese Anexo es que la significancia de los coeficientes de las variables de educación, confianza en las FARC y apoyo al partido Centro Democrático se mantienen, mientras que las hipótesis continúan sin cumplirse. Además, en la Tabla 3.4 se pone a prueba el argumento de Weintraub et al. (2015). En ésta, aparte de no encontrar significancia estadística en su hipótesis, los coeficientes en cuestión mantienen su significancia.

Dada la naturaleza interactiva del argumento propuesto, es necesario interpretar los modelos que aquí se presentan considerando cada componente de la interacción y su interrelación. En específico, los términos constitutivos deben interpretarse en relación a la otra variable, cuando esta última es igual a cero—es decir, un escenario sin violencia, con una tasa de desplazados igual a cero, o el efecto para no-víctimas, según el caso. En general, dada la falta de significancia estadística para el término interactivo entre victimización y la tasa de desplazamiento, *no* hay sustento empírico para la hipótesis 2. Es decir, conforme aumenta la violencia, las víctimas *no* manifiestan preferencias de JT diferentes a las no-víctimas. La ausencia de significancia estadística para la variable de victimización reitera, además, que las víctimas en contextos no violentos tampoco difieren en sus preferencias. La variable que refiere a la tasa de desplazados indica el efecto de la violencia para una no-víctima, señalando que solo en el caso de mecanismos de conmemoración el aumento de violencia genera *menor* apoyo *entre las no-víctimas* para hacer actos de memoria de la violencia ejercida. La explicación probable es que, de todos los mecanismos de justicia restaurativa analizados, recordar públicamente los hechos es el mecanismo que menos costos impone a los perpetradores y para el que probablemente se percibe deriva menos beneficios para la sociedad en general, particularmente para alguien que no padeció la violencia de manera directa en su persona o red familiar cercana. Podría ser que, conforme aumenta la violencia, las *no-víctimas* tienen interés en medidas que les garantice la no-repetición, para lo cual la medida de conmemoración no sería lo ideal porque no funge como un disuasorio.

Sobre los controles, hay algunos hallazgos que vale la pena discutir. Respecto a la confianza en las FARC, ésta muestra consistencia con los mecanismos: los que más confianza tienen en ellos prefieren amnistías y conmemoraciones, medidas que, como ya fue mencionado, no implican ningún costo para los perpetradores. Esto indica que el trabajo de Arjona (2017) se sostiene. No es el estatus de victimización individual lo que define las preferencias de los colombianos: lo que en realidad está jugando un papel clave en la definición de estas preferencias es la proximidad y la relación entre el grupo armado y los ciudadanos del territorio del que tomaron control. Sin embargo, para poder medir estas relaciones a profundidad, es necesario una base de datos con análisis más profundo y desagregado que a la fecha no existe.

Otro hallazgo interesante es que las personas que apoyan al partido Centro Democrático, liderado por Uribe, tienen mayor probabilidad de estar de acuerdo con que los miembros de las

FARC que confiesen sus crímenes deben ser perdonados. Esto resulta contradictorio porque el gobierno de Uribe catalogaba de “terroristas” a las FARC y no estaba dispuesto a darles el mismo trato que a los paramilitares. Cuando Santos tomó mandato, dado que él era el Ministro de Defensa de Uribe, las personas creían que seguiría las mismas políticas de seguridad que Uribe (Rodríguez, 2014). Sin embargo, el hallazgo sigue siendo contradictorio porque para el 2013 ya era muy claro que Santos no seguiría la misma estrategia. ¿Por qué el apoyo a Santos está positivamente relacionado a aprobar amnistías para los miembros de las FARC? Una posible explicación es que los votantes están satisfechos con los resultados de la desmovilización de los paramilitares y creen que también podría ser exitosa con las FARC. Sin embargo, es relevante hacer énfasis en que en este momento el discurso no estaba tan politizado. La rivalidad entre Uribe y Santos ya era visible, pero el primero todavía no comenzaba su campaña del “no” contra el referendo. En este sentido, el signo y la significancia del coeficiente podría señalar a que las actitudes en 2013 todavía no estaban politizadas.

Además, hay otros dos controles con efectos consistentes y altamente significativos: sexo y educación. Por una parte, lo que el primero muestra es apoyo a la hipótesis de Samuel (2011), ya que, dado que los términos de la paz están diseñados por hombres y para hombres, los mecanismos de JT estaban enmarcados bajo esta lógica y, por lo mismo, los hombres tienen mayor probabilidad de apoyar todos los mecanismos de JT evaluados. Por otra parte, lo que los resultados del coeficiente de educación parecen mostrar es que la sofisticación política¹² de los individuos es una variable clave para entender cómo se presenta un proyecto de JT. Dado que solo las personas que tienen la capacidad de entender las implicaciones de cada mecanismo son consistentes con sus respuestas, esto enfatiza la falta de democratización del entendimiento de la JT y que, en general, estos mecanismos siguen una lógica complicada que requieren de un nivel de entendimiento y análisis al que no cualquier persona tiene acceso.

El siguiente paso es evaluar el argumento de la tesina en el 2016. Para la Tabla 5 los hallazgos muestran las preferencias cuando las negociaciones apenas se hicieron públicas y el público ya cuenta con la experiencia de lo ocurrido en el mandato de Uribe con la Ley de Víctimas y Restitución de la Tierra, y la guerra contra las FARC. Sin embargo, todavía no era claro qué medidas contemplarían los acuerdos de paz y la población no tenía mucha noción de

¹² Un individuo con sofisticación política tiene acceso a conocimiento, poder de conceptualización y, por lo tanto, tiene posturas políticas consistentes en distintos temas. Estos individuos entienden las políticas públicas en curso y tienen la capacidad de evaluarlas (Converse, 1964; Smith, 1989).

lo que implica un proceso de JT. En 2016 la situación ya era distinta: ¿cómo es ahora que ya se politizaron los acuerdos y que ya se saben los términos para la paz? Para contestar a esta pregunta se replicaron, dentro de lo posible, los 4 modelos multinivel lineales de la Tabla 5, pero ahora con datos de LAPOP 2016 y del CEDE 2003-2015. Se hablan de acuerdos politizados porque en este momento la campaña del “no” de Uribe ya había permeado el discurso sobre los acuerdos de paz y el levantamiento de la encuesta tomó lugar poco antes del referendo. Por lo tanto, dado que hubo un esfuerzo gubernamental por contrarrestar la campaña negativa de Uribe, la información sobre los distintos mecanismos de JT y sus implicaciones fue democratizada y extendida a lo largo de Colombia. Esto podría estar generando respuestas más informadas y preferencias más arraigadas. La Tabla 6 muestra los resultados de las regresiones multinivel para el 2016

Tabla 6: Efecto de la violencia en las preferencias individuales sobre mecanismos de JT en 2016

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Tasa de desplazados 2003-2015	-0.001 [(0.001)]	-0.000 [(0.001)]	0.000 [(0.000)]	-0.000 [(0.001)]
Tasa de homicidios de 2003-2015	0.017 [(0.018)]	0.033 [(0.031)]	0.024 [(0.019)]	0.021 [(0.021)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	-0.058 [(0.120)]	-0.057 [(0.200)]	0.214 [(0.135)]	0.034 [(0.154)]
Desplazados x victimización	-0.001 [(0.001)]	0.001 [(0.001)]	-0.001** [(0.001)]	-0.000 [(0.001)]
Confianza en las FARC	-0.414*** [(0.042)]	0.142** [(0.067)]	0.014 [(0.046)]	0.062 [(0.052)]
Confianza en las BACRIM	0.068 [(0.057)]	-0.066 [(0.096)]	-0.079 [(0.064)]	-0.148** [(0.073)]
Centro democrático	0.491** [(0.217)]	-0.040 [(0.376)]	0.151 [(0.254)]	0.114 [(0.288)]
Sexo	0.367*** [(0.099)]	0.164 [(0.164)]	-0.089 [(0.111)]	-0.014 [(0.127)]
Educación	-0.066 [(0.078)]	-0.205 [(0.127)]	0.102 [(0.086)]	0.143 [(0.097)]
Edad	-0.015*** [(0.004)]	-0.004 [(0.006)]	-0.001 [(0.004)]	0.004 [(0.005)]
Católica	0.148 [(0.113)]	-0.055 [(0.185)]	-0.044 [(0.125)]	0.020 [(0.142)]
Situación económica	-0.026 [(0.067)]	-0.270** [(0.112)]	0.042 [(0.076)]	0.086 [(0.086)]
Tamaño del municipio	0.184** [(0.086)]	-0.132 [(0.148)]	-0.019 [(0.092)]	0.129 [(0.104)]
Rural/Urbano	0.108 [(0.155)]	-0.350 [(0.262)]	-0.016 [(0.176)]	0.339* [(0.199)]
Constante	6.053*** [(0.377)]	5.098*** [(0.635)]	5.745*** [(0.421)]	4.886*** [(0.480)]
Observaciones	1,462	722	729	730
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2016) y CEDE (2019).

Como ya fue mencionado, el propósito de la Tabla 6 es ver cómo las preferencias fueron actualizadas, observar si hay nuevos hallazgos sobre las hipótesis y analizar la factibilidad de las hipótesis alternativas. Lo que es posible observar en la Tabla 6 es que la tasa de desplazados deja de ser significativa para todos los modelos y la tasa de homicidios se mantiene sin coeficientes significativos. Este cambio, aunque mínimo, apunta a que mientras las

negociaciones entre Santos y las FARC estaban en curso, las personas en municipios con violencia activa siguieron actualizando sus preferencias. Esto se refuerza con el hallazgo del coeficiente negativo para la interacción entre contexto y victimización para el Modelo 3, porque ahora, conforme aumenta la violencia (medida por la tasa de desplazados), las víctimas tienen menor probabilidad de apoyar la búsqueda de la verdad como mecanismo de la reconciliación, lo cual no era un coeficiente significativo en la Tabla 5. Estos últimos hallazgos podrían entenderse en dos sentidos. El primero es que las víctimas en contextos con una tasa de desplazados alta tienen menor probabilidad de creer en que la búsqueda de la verdad llevará a la reconciliación porque, con el transcurso de los años, la posibilidad de encontrar a sus seres queridos y de saber la verdad es menos factible. Esta posible explicación es viable porque gana significancia entre las víctimas, pero no así entre las no-víctimas. La otra posibilidad es que haya ocurrido un cambio en el discurso que los llevó a modificar sus preferencias porque, como ya fue mencionado, la violencia seguía en curso y, por lo tanto, seguía permeando en sus exigencias del modelo de JT. Esta explicación será analizada a continuación.

Lo que la Tabla 6 muestra es que los hallazgos de la Tabla 5 sobre la confianza en las FARC se mantiene en el mismo sentido y con los mismos mecanismos de JT, lo cual quiere decir que las personas que confían en dicho grupo, están más de acuerdo con darle amnistía y con que no se les imponga castigos severos. Estas preferencias de socialización no se ven modificadas por el tiempo ni por el proceso de politización. Sobre la pérdida de significancia de la variable de educación en todos los mecanismos —menos en el Modelo 2 y con signo invertido—, podría afirmarse que la sofisticación política fue relevante en un primer momento, cuando los procesos de JT todavía no eran comprendidos por la población en general. Sin embargo, este efecto se ve neutralizado con la socialización de la información.

Aunado al hallazgo sobre la pérdida de significancia de la variable de educación, lo que puede observarse para la variable de sexo es algo similar. Ser hombre deja de ser un determinante en el apoyo a los mecanismos de JT explorados en la presente tesis. El único mecanismo para el que se sostiene el apoyo de los hombres es para el de castigo: los hombres están más a favor de que los miembros rascos de las FARC que confiesen no vayan a la cárcel. Sin embargo, para las demás variables no hay significancia. Lo que esto último implica es que hace falta mayor perspectiva de género en los estudios de JT para entender la variación y su papel en los procesos de exigencia de paz. Lo que podría estar pasando es que el discurso en esos años cambió y

generó que las expectativas de las mujeres fueran cumplidas con los términos de la paz. Sin embargo, hacen falta más trabajos que exploren el papel de la mujer en los procesos de paz y durante los conflictos en general.

No obstante, es necesario hacer dos aclaraciones antes de continuar con el análisis. Una primera observación es que este no es un ejercicio perfecto porque las preguntas no son idénticas: no es un panel y el fraseo de las preguntas varía entre levantamientos. Otra salvedad es que los Modelos 2, 3 y 4 son parte de experimentos dentro de la encuesta del 2016, por lo que la muestra es más pequeña que en el 2013. Si bien ambas preservan su representatividad, esto también disminuye la probabilidad de que los resultados del 2013 sean comparables a los del 2016 en su totalidad. Empero, los resultados del Modelo 1 no enfrentan estos problemas y ofrecen luz sobre la hipótesis de partidismo.

La Tabla 6 muestra que, contrario a los hallazgos en el 2013, ahora los partidistas del Centro Democrático están en contra de que los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes no vayan a la cárcel. Esto está en línea con el discurso de Uribe y permite observar cómo su campaña contra los acuerdos de paz tuvo un impacto significativo en el proceso de formación de preferencias de los individuos. Aquí se da un fenómeno interesante porque es una intersección entre la literatura que explora los referendos de los acuerdos de paz y las preferencias por distintos mecanismos de JT. Por mencionar un ejemplo, lo que Stedman (1997) muestra en su trabajo es que los procesos de paz son negocios riesgosos porque hay sabotadores —líderes y partidos que ven los procesos de paz como una amenaza a su poder y usan la violencia para deslegitimar los acuerdos. Además del riesgo que los promotores de paz encuentran en sus oponentes, estos “saboteadores” también son una amenaza para los ciudadanos, ya que las amenazas a los acuerdos de paz aumentan la inseguridad y la incertidumbre en el día a día (Stedman, 1997). En este sentido, puede observarse que Uribe fungió como un “saboteador” y esto generó que las exigencias de la sociedad fueran moldeadas por las preferencias partidistas más que definirse a partir de lo que las personas requerían para lograr la reconciliación.

VI. ¿Cómo se definen las preferencias por los distintos mecanismos de JT?

Contrario a las expectativas teóricas que la presente tesina expuso, los ejercicios empíricos demuestran que ni la violencia ni haber sufrido alguna forma de victimización son factores con poder sustantivo y consistente en la definición de preferencias de las personas sobre

mecanismos de JT. Aunque en 2013 la tasa de desplazados tiene efecto sobre la preferencia por conmemoraciones y en 2016 la interacción entre victimización y violencia tiene efecto sobre la preferencia por medidas de verdad, y en ambos casos el efecto es con el signo esperado — negativo porque son medidas de justicia restaurativas—, la significancia de los demás coeficientes no es consistente ni entre años ni con respecto a las hipótesis. El argumento, con base en la teoría de las emociones, esperaba que hubiera una consistencia entre apoyo a medidas de justicia retributiva y desaprobación por medidas de justicia restaurativas, pero los hallazgos muestran que la formación de preferencias es más complicada y no se limita a esa dicotomía. El espectro de emociones va más allá de positivas y negativas. El miedo podría llevar a desaprobación estas medidas, no porque crean que es injusto, sino porque pueden aumentar la búsqueda de información y reducir el efecto de las preferencias previas (Brader, 2005). Con esto en mente, es necesario que la literatura sobre las emociones sea incorporada en el estudio de las preferencias por JT de forma desde lo empírico. Elster (2004) ha teorizado al respecto, pero para medir el efecto empírico es necesario contar con herramientas (encuestas, entrevistas, trabajo de campo, etc.) que permitan tener una idea del efecto real.

Diversos trabajos han mostrado que la aprobación por distintos mecanismos de JT en una sociedad post-conflicto no es estable en el tiempo (Hazan, 2016; Backer, 2010). Estos trabajos se concentran en estudiar la *aprobación*, lo cual está ligado a la evaluación individual de lo que el gobierno en turno implementó para la reconciliación, no necesariamente de la preferencia por lo que cada mecanismo implicaría. Por lo tanto, estos estudios se insertan en sociedades en los que el conflicto ya concluyó, pero ¿qué pasa con los casos que usan la JT para empujar la paz? Lo que el caso colombiano muestra en este estudio es que las preferencias continúan actualizándose y son vulnerables a cambios socio-políticos. Si bien esto es lo esperado desde la literatura de la opinión pública (Altamirano, 2015; Ley, 2017; De Graaf et al., 1995; Voors et al., 2012), los hallazgos señalan a la necesidad de entender la formación de preferencias por medidas pro-paz en un momento en el que el contexto sigue violentando a los individuos.

Estos hallazgos tienen implicaciones profundas para el campo de JT y su entendimiento de los ciudadanos que han vivido distintas formas de victimización en un ambiente que continuamente vulnera su integridad. A lo que los hallazgos apuntan es a que, se ha estudiado el efecto de la violencia en las preferencias de los individuos, pero hace falta analizar cómo la

duración de los conflictos impacta en las personas, sus preferencias y sus comportamientos. Como ya fue mencionado reiteradas veces, Colombia es un ejemplo de una guerra civil no convencional que ha estado activa por varias décadas. Sin embargo, la literatura tiende a enfocarse en estudiar a las personas en sociedades post-conflicto en donde los eventos tuvieron una corta, aunque devastadora, duración. Esto ha generado un vacío en la literatura sobre los individuos que nacen, crecen y mueren inmersos en una situación de guerra continua. Si bien las hipótesis no se comprueban, esto no quiere decir que la violencia no tenga un impacto en la formación de las preferencias. Por el contrario, muestra que tiene un efecto indirecto que permite que las preferencias se actualicen en el imaginario de víctimas y no-víctimas que no son ni apolíticas ni forman parte de grupos homogéneos.

Los hallazgos de este trabajo y los de Nussio et al. (2015) parecen apuntar a que cuando la violencia es de tan larga duración y los civiles han sido trastocados en todas las dimensiones de su día a día, no solo se borra la frontera entre qué quieren las víctimas y qué quieren las no-víctimas, sino que también hay un efecto en cómo la violencia es vivida y entendida. Lógicamente esto tiene efectos, no explorados, en cómo se puede concebir y empujar la paz. Esto es especialmente delicado cuando se habla de la centralidad de la víctima y cómo los gobiernos transmiten a sus ciudadanos los beneficios e implicaciones de un proceso de JT.

Además, hay otras variables que tuvieron un poder explicativo alto y que tiene resultados consistentes: la confianza en las FARC y el partidismo. Respecto a la primera, ésta está relacionada a los hallazgos de Arjona (2017): la experiencia individual con los grupos armados define cómo visualizan a la sociedad post-conflicto. La otra variable que logró explicar en gran parte los cambios entre un levantamiento de encuesta y el otro es el partidismo. Esto puede ser atribuido a la politización del discurso. Empero, estos resultados deben de ser entendidos dentro del problema de endogeneidad que pueden presentar: puede que las personas se alineen a un partido porque el discurso es acorde a sus ideales o puede que los partidistas duros se alinean al discurso del partido. Lo que los hallazgos sugieren es que hace falta un trabajo de campo más extendido en el que se indague en las relaciones entre los ciudadanos y los grupos armados que controlan su territorio durante el conflicto y sobre el sentido de la causalidad entre partidismo y preferencias. Si bien respecto al primer punto éste es el propósito de Arjona (2016) y de Moncada (2019), sus muestras no alcanzan a analizar cada municipio. Además, como ambos trabajos muestran, para este tipo de análisis se necesita un nivel de análisis más fino que el

municipal. Sin embargo, este tipo de trabajos superan la capacidad del presente trabajo e imponen muchos problemas metodológicos. Por mencionar uno, al tratarse de sociedades que siguen con conflicto activo, la seguridad de los investigadores es frágil y no es posible entrar a cada población controlada. Sobre el segundo, el debate ha sido estudiado a profundidad por distintas escuelas de opinión pública, pero probablemente trabajo cualitativo de campo podría ayudar a esclarecer su papel en contextos de violencia permanente.

Dado que cada medida de JT y sus implicaciones son cuestiones complicadas de dimensionar y entender, los resultados revelan la importancia de hacer del conocimiento de todos en qué consiste cada mecanismo de JT y sus posibles implicaciones para la sociedad. Lastimosamente, cuando los más afectados tienden a ser los más marginados, como es el caso de Colombia, las personas no tienen la sofisticación política necesaria para definir qué necesitan para la reconciliación. Esto puede ser utilizado como herramienta política dado que muchas personas se guían más por el partidismo que por un entendimiento real de la situación. En este escenario, la JT con centralidad de la víctima puede terminar siendo una cuestión de poder político más que de ayuda a las víctimas y a la sociedad. Los modelos presentados son reveladores para entender el papel de la sofisticación política; el de las relaciones entre grupos armados y sociedad, y del partidismo en procesos de JT; sin embargo, no alcanza a decir mucho sobre las preferencias en sí. Lo que los modelos explican es el poder que los encuestados ponen sobre cada mecanismo de JT para llevar a la reconciliación, no sobre lo que es justo o no para la sociedad que ha vivido un conflicto de larga duración.

VII. Conclusiones

Entonces, ¿qué determina la preferencia por unos mecanismos de JT sobre otros? El argumento central de la presente tesina es que el nivel de violencia municipal permea las preferencias individuales de la población en general y que esto conduce a una demanda por JT según experiencias individuales con la violencia, mismas que son acentuadas cuando hay victimización en contextos de violencia extendida. No obstante, lo que la presente tesina mostró es que la violencia y la victimización son variables que interactúan de una forma compleja y que son características que impactan a los individuos de forma diferenciada: no dejan de actualizarse. Además, los hallazgos indican que hay otros factores —sexo, educación y relación con el grupo armado en cuestión— que también moldean las preferencias de los individuos y

que deberían de recibir más atención. La clave entonces debería de estar en internalizar que las víctimas no son un grupo homogéneo y apolítico. Por el contrario, mientras definen sus preferencias sobre mecanismos de JT, sus experiencias e identidades entran en tensión. Los individuos conciben una sociedad post-conflicto a través de sus identidades y sus necesidades individuales y colectivas.

A pesar de los múltiples ejercicios de robustez, tanto para los modelos estadísticos como para los datos contextuales y su representatividad, es imperativo reconocer que los hallazgos tienen que ser entendidos dentro de sus limitaciones metodológicas. En específico, medir la opinión pública sobre temas tan delicados como preferencias sobre medidas de justicia (ampliamente entendida), puede ser poco confiable con encuestas. Probablemente utilizar entrevistas u homogeneizar las preguntas de los levantamientos podría disminuir tanto la deseabilidad social como la superficialidad de las preguntas y la posibilidad de utilizar esto como termómetro de la opinión pública. Herramientas como entrevistas panel, como la de Backer (2010), o trabajo de campo como el de Arjona (2017) y García (2016), permitirían tener una aproximación más iluminadora.

En este sentido, surgen diversas líneas de investigación específicas que es necesario que sean exploradas en el futuro. La primera es que es necesario ampliar los estudios empíricos a países con conflicto vigente porque las preferencias en este momento son muy distintas a las que se definen una vez que el conflicto termina. Mientras hay negociaciones, la violencia continua y, por lo tanto, las preferencias continúan actualizándose. Una segunda línea de investigación es la que se desprende del trabajo de Arjona (2017): las relaciones entre grupos armados y civiles son variantes y decisivas para la formación de preferencias. Esta literatura también ha sido ignorada por la tendencia de estudiar conflictos étnicos en los que el “enemigo” es claro y las interacciones son violentas. Finalmente, es necesario que se ahonde en comprender el papel de las emociones en la formación de preferencias. Parece existir una relación muy fuerte entre los sentimientos y la definición de justicia a nivel individual. Para que los procesos de JT efectivamente tengan una reparación psicosocial integral es necesario comprender el mecanismo detrás de las demandas.

Lo que la presente tesina busca enfatizar es tanto las limitaciones para analizar las políticas de JT con centralidad de la víctima que buscan empujar la paz como las complicaciones que la politización de estos procesos puede imponer para la paz post-conflicto. No solo hace

falta entender cómo se formulan las preferencias de los individuos que interactúan permanentemente con la violencia, sino que aprender a extender información relevante para la población que les sirva para perdonar y olvidar es todavía un reto que debería de ser objeto de mayor estudio y escrutinio. Finalmente, el presente trabajo empuja a futuros trabajos a cambiar la forma en la que se conciben a las víctimas. Éstas, contrario a la expectativa general, no son un grupo débil y homogéneo (Jamar, 2018). Son personas que han aprendido a defenderse por sus propios medios y que, como cualquier persona, no son apolíticos ni son un grupo homogéneo.

En suma, es imperativo que el diseño de políticas de JT sea redefinido desde un entendimiento amplio de qué implica ser víctima, cómo incluir la perspectiva de género, qué impacto tiene el vivir en violencia continua y cómo la relación con los grupos armados moldean las exigencias de los individuos en los procesos de paz. Además, debe ser reconsiderado si refrendar acuerdos de paz debe ser algo permisible. Sin considerar estos elementos no será viable llegar a la paz sostenible ni empujar la reconciliación que los países que optan por esta vía necesitan tan desesperadamente. Cuando se habla de JT se habla de personas con las que el Estado tiene una deuda impagable: politizar estos procesos solo revictimiza.

Referencias

- Aguilar, P., Balcells, L. y Cebolla-Boado H. (2011). Determinants of Attitudes Toward Transitional Justice: An Empirical Analysis of the Spanish Case. *Comparative Political Studies*, 44(10), 1397-1430.
- Aguilar, L. F. (2010). *Política Pública*. Ciudad de México: EAPDF-Siglo XXI Editores.
- Altamirano, M. (2015). *Tesis doctoral: Democracy and Labor Market Outsiders: The Political Consequences of Economic Informality*. Durham: Duke University.
- Altamirano, M., Berens, S. y Ley, S. (2020). The Welfare State amid Crime. *Politics & Society*. (próximamente).
- Arjona, A. (2010). "One National War, Multiple Local Orders: An Inquiry into the Unit of Analysis of War and Post-War Interventions". En Bergsmo, M. y Kalmanovitz P. *Law in Peace Negotiations*. Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
- . (2016). Institutions, Civilian Resistance, and Wartime Social Order: A Process-Driven Natural Experiment in the Colombian Civil War. *Latin American Politics and Society*, 58(3), 99-122.
- . 2017. "Rebelocracy: A Theory of Social Order in Civil War", *Kellogg Institute for International Studies*, 422: working paper.
- Backer, D. (2010). Watching a Bargain Unravel? A Panel Study of Victims' Attitudes about Transitional Justice in Cape Town, South Africa. *International Journal of Transitional Justice*, 4, 443-456.
- Barnes, C. (2006). Agents for Change: Civil Society Roles in Preventing War & Building Peace. *European Centre for Conflict Prevention*, 2, 1-111.
- Bateson, R. A. (2012). Crime Victimization and Political Participation. *American Political Science Review*, 106(3), 570-87.
- Brader, T. (2005). Striking a Responsive Chord: How Political Ads Motivate and Persuade Voters by Appealing to Emotions. *American Journal of Political Science*, 49(2), 388-405.
- Branton, D., Pulido, A. y Meernik. (2019). Violence, voting & peace: Explaining public support for the peace referendum in Colombia. *Electoral Studies*, 61, 1-13.
- Campbell, A., Converse, P.E., Miller, W. y Stokes, D. (1960). *The American Voter*. New York: Wiley.

- CEDE. (2019). Panel Municipal del CEDE 1993-2018. *Universidad de los Andes*. Consultado el 4 de mayo del 2020. Solicitar acceso en: <https://datoscede.uniandes.edu.co/es/catalogo-de-microdata>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Cifras: Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano*. Bogotá: CNMH.
- CIDE y CNDH. (2018). “Resumen ejecutivo”. En *Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México*. Consultado el 8 de diciembre de 2018. Recuperado de https://works.bepress.com/javier_martin/52/download/
- Converse, P. E. (2006 [1964]). The nature of belief systems in mass publics. *Critical Review*, 18(1), 11-29.
- DANE. (2016). Censo General de Población 2005. Consultado el 11 de octubre de 2020. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MICRODATOS/about_collection/2/3
- Dávalos, E., Morales, L.F., Holmes, J. S., y Dávalos, L. M. (2018). Opposition Support and the Experience of Violence Explain Colombian Peace Referendum Results. *Journal of Politics in Latin America*, 2, 99-122.
- David, R. y Choi, S. Y. P. (2006). Forgiveness and Transitional Justice in the Czech Republic. *Journal of Conflict Resolution*, 50(3), 339–367.
- . (2009). Getting Even or Getting Equal? Retributive Desires and Transitional Justice. *Political Psychology*, 30(2), 161–192.
- de Graaf Nan Dirk, P. N. y Heath, A. (1995). Class Mobility and Political Preferences: Individual and Contextual Effects. *American Journal of Sociology*, 100(4), 997-1027.
- DeMeritt, J. H. R., Pulido, A., Mason, T.D. y Meernik, J. (2019). “Land, Violence, and the Colombian Peace Process”. En Meernik, J., DeMeritt, J. H. R. y Uribe-López M. (eds.). *As War Ends*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elster, J. (2004). “Emotions”. En *Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Felter, C. y Renwick, D. (2017). “Colombia’s Civil Conflict”. *Council of Foreign Relations*. Consultado el 22 de marzo de 2020. Recuperado de www.cfr.org/backgrounder/colombias-civil-conflict.

- García, M. (2016). Control territorial y decision de voto en Colombia: un enfoque multinivel. *Política y gobierno*, XXIII(1), 57-95.
- Gibson, J. L. (2009). *Overcoming Historical Injustices: Land Reconciliation in South Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guembe, M. J. y Olea, H. (2006). “No justice, no peace: Discussion of a legal framework regarding the demobilization of non-state armed groups in Colombia”. En Naomi Roht-Arriaza y Javier Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, J., Kovras, I., Stefanovic, D., y Loizides, N. (2018). Exposure to Violence and Attitudes Towards Transitional Justice. *Political Psychology*, 39(2), 345-363.
- Hazan, P. (2016). Measuring the impact of punishment and forgiveness: a framework for evaluating transitional justice. *International Review of the Red Cross*, 88, 19-47.
- Holland, A. C. (2018). Diminished Expectations: Redistributive Preferences in Truncated Welfare States, *World Politics*, 70(4), 555–594.
- Jamar, A. (2018). “Victims’ Inclusion and Transitional Justice: Attending to the Exclusivity of Inclusion Politics.” En *PA-X Report: Transitional Justice Series*. Edinburgh: Global Justice Academy, University of Edinburgh. Recuperado de <http://www.politicalsettlements.org/publications-database/victims-inclusion/>
- Kalyvas, S. (2006). *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krause, K. (2014). Supporting the Iron Fist: Crime News, Public Opinion, and Authoritarian Crime Control in Guatemala. *Latin American Politics and Society*, 56(1), 98– 119.
- LAPOP. (2013). Colombia 2013 STATA. *The AmericasBarometer*. Consultado el 9 de octubre del 2020. Recuperado de <http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true>
- LAPOP. (2016). Colombia 2016 STATA. *The AmericasBarometer*. Consultado el 9 de octubre del 2020. Recuperado de <http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true>
- Ley, S. 2017. To Vote or Not to Vote: How Criminal Violence Shapes Electoral Participation. *Journal of Conflict Resolution*, 1-28.
- Liendo, N. y Braithwaite J.M. (2018). Determinants of Colombian attitudes toward the peace

- process. *Conflict Management and Peace Science*, 35(6), 622-636.
- Moncada, E. (2019). The Politics of Criminal Victimization: Pursuing and Resisting Power. *Perspectives on Politics*, 1-16.
- Moser, C y McIlwaine, C. (2004). *Encounters with Violence in Latin America: Urban Poor Perceptions from Colombia and Guatemala*. New York: Routledge.
- Newman, S. (2012). Between Optimism and Pessimism: Israeli Attitudes Toward Conflict Resolution in the Oslo Era. *Nationalism and Ethnic Politics*, 18(4), 476-504.
- Nussio, E., Rettberg, A. y Ugarrriza, J. (2015). Victims, Non-victims, and their Opinions on Transitional Justice. Findings from the Colombian Case. *International Journal or Transitional Justice*, 1-21. DOI: 10.1093/ijtj/ijv006
- O'Donnell, G. (1993). On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries. *World Development*, 21(8), 1355-69.
- Orlando, J. (2017). *Historia Mínima de Colombia*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Peugh, J. L. (2010). A practical guide to multilevel modeling. *Journal of School Psychology* 48, 85-112.
- Pham, P., Vinck, P., Stover, E., Moss, A., Wierda, M. y Bailey, R. (2007). When the war ends: A Population-Based Survey on Attitudes about Peace, Justice, and Social Reconstruction in Northern Uganda. *ICTJ, Human Rights Center y Payson Center for International Development*.
- Presidencia de la República. (2017). Estos son los municipios de las Zomac. Consultado el 11 de junio de 2020. Recuperado de <http://es.presidencia.gov.co/noticia/171009-Estos-son-los-municipios-de-las-Zomac>
- Reed, M. (2009). *La encrucijada histórica de la justicia*. Bogotá: Politécnico Grancolombiano.
- Rettberg, A. 2008. *Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas?*. GTZ BmbH: Bogotá D.C.
- Rodríguez, G. P. (2014). Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?. *NUSO* 254. Consultado el 16 de mayo de 2020. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/alvaro-uribe-y-juan-manuel-santos-una-misma-derecha/>
- Samii, C. (2013). Who wants to forgive and forget? Transitional justice preferences in postwar Burundi. *Journal of Peace Research*, 50(2), 219-233.

- Samuel, K. (2011). "Women in the Sri Lanka Peace Process: Included but Unequal." En Oré, G. y Gómez Isa, F. (eds.). *Rethinking Transitions: Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict*. Oxford: Intersentia.
- Smith, E. (1989). *The Unchanging American Voter*. Berkeley: California: University of California Press.
- Stedman, S. J. (1997). Spoiler Problems in Peace Processes. *International Security*, 22(2), 5-53.
- Taylor, L. K. (2015). Transitional justice, demobilization and peacebuilding amid political violence: examining individual preferences in the Caribbean coast of Colombia. *Peacebuilding*, 3(1), 90-108.
- Trejo, G., Albarracín, J. y Tiscornia, L. (2018). Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies. *Journal of Peace Research*, 20(2), 1-20.
- Visconti, G. (2019). Policy Preferences after Crime Victimization: Panel and Survey Evidence from Latin America. *British Journal of Political Science* (próximamente).
- Voors, M., Nillesen, E., Verwimo, P., Bulte, E., Lensink, R., y Van Soest, D. (2012). Violent Conflict and Behavior: A Field Experiment in Burundi. *American Economic Review*, 102(2), 941-964. DOI: <http://dx.doi.org/10.1257/aer.102.2.94>
- Weintraub, M., Vargas, J. F., y Flores, T. E. (2015). Vote choice and legacies of violence: evidence from the 2014 Colombian Presidential elections. *Research and Politics*, 1-8.

ANEXOS

Anexo 1. Operacionalización de las variables para los modelos con LAPOP 2013 presentados en la Tabla 5

Tipo de variable	Variable	Pregunta en la encuesta/medición	Cómo es medida originalmente	Operacionalización	Origen
Variables dependientes	Justicia retributiva	"Los miembros de grupos guerrilleros (FARC) que confiesen sus crímenes no deben ser castigados. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?"	Instrucciones: Para que las actuales conversaciones de paz entre Gobierno y FARC sean exitosas algunas personas creen que el gobierno colombiano debe hacer algunas concesiones a los miembros de las FARC. Enseguida le voy a leer algunas afirmaciones y quisiera que usted me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es "muy en desacuerdo" y 7 es "muy de acuerdo".	Se conservó la operacionalización original del cuestionario, pero en el orden contrario para que la lectura sea intuitiva.	LAPOP (2013)
	Justicia restaurativa	"Reparar a las víctimas de las FARC contribuiría para la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?"	Instrucciones: Algunas personas creen que el proceso de paz debe contribuir a la reconciliación de los colombianos y que la reconciliación depende de generar verdad, justicia y reparación. Enseguida le voy a leer algunas afirmaciones relacionadas con este tema, y quisiera que usted	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)

			me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.		
		“Recordar públicamente los crímenes cometidos por las FARC contribuiría a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”	Instrucciones: Algunas personas creen que el proceso de paz debe contribuir a la reconciliación de los colombianos y que la reconciliación depende de generar verdad, justicia y reparación. Enseguida le voy a leer algunas afirmaciones relacionadas con este tema, y quisiera que usted me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)
		“El establecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por las FARC contribuiría a la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”	Instrucciones: Algunas personas creen que el proceso de paz debe contribuir a la reconciliación de los colombianos y que la reconciliación depende de generar verdad, justicia y reparación. Enseguida le voy a leer algunas afirmaciones relacionadas con este tema, y quisiera que usted	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)

			me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.		
Variables independientes	Violencia	Número total de homicidios 2012	Aquí solo se consideraron los homicidios en 2012.	El número total de homicidios fue convertido en tasa por cada 1,000 habitantes.	Panel de violencia (CEDE, 2019): Ministerio de Defensa
		Número total de homicidios 2003-2012	Es conteo de eventos de 2003 a 2012 por municipio.	Lo que se hizo fue sumar todos los eventos reportados del 2003 al 2012 por municipio y convertirlo en tasa de homicidio de cada municipio.	Panel de violencia (CEDE, 2019): Ministerio de Defensa
		Número de personas expulsadas por desplazamiento	Número de personas expulsadas por desplazamiento registradas en el RUV en el 2012.	El número total de personas desplazadas fue convertido en tasa por cada 1,000 habitantes.	Panel de violencia (CEDE, 2019): Registro Único de Víctimas
		Número de personas expulsadas por desplazamiento 2003-2012	Número de desplazados registrados en el RUV del 2003 al 2012.	Lo que se hizo fue sumar todos los eventos reportados del 2003 al 2012 por municipio y convertirlo en tasa para cada municipio.	Panel de violencia (CEDE, 2019): Registro Único de Víctimas
	Victimización	“¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?”	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a “sí” y 0 a “no”.	Para víctima: se conservó como dummy, en donde 1 equivale a que el encuestado haya reportado ser víctima de al menos una forma de victimización y 0 de ninguna.	LAIPOP (2013)
		“¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para		LAIPOP (2013)

		familia tuvo que irse del país? "	que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		LAPOP (2013)
		"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue reclutado forzosamente?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
		"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue víctima de violencia sexual?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
		"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue víctima de una tortura?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
		"¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto que sufre el país?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
		"¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
		"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es "sí" y 2 es "no". Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		
	Violencia x victimización	Índice de victimización interactuado con la tasa de personas desplazadas por municipio y otro interactuado con	Para Tabla 5 es desplazamiento 2003-2012 y para los Anexos 3 está especificado en cada modelo.		LAPOP (2013) + CEDE (2019)

		la tasa de homicidios.			
Controles	Rural/urbano	Es parte de la información que el encuestador reporta: “Rural o urbano”.	Respuesta: 1 si es urbano y 2 si es rural.	Se conservó como variable dicotómica, pero fue recodificada para que 0 fuera “rural” y 1 “urbano”	LAPOP (2013)
	Sexo	Es parte de la información que el encuestador reporta.	Instrucciones. “Anotar, NO preguntar”.	Se conservó como variable dicotómica, pero fue recodificada para que 0 fuera “hombre” y 1 “mujer”.	LAPOP (2013)
	Partidismo	¿Con cuál partido político simpatiza usted?	Instrucciones: No leer opciones. Respuestas: (801) Partido Liberal (802) Partido Conservador (803) Polo Democrático Alternativo (804) Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional) (805) Cambio Radical (806) Convergencia Ciudadana (808) Colombia Democrática (809) Colombia Viva (810) Movimiento MIRA (817) Alianza Social Indígena (ASI) (819) Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA) (821) Partido Verde (822) Partido de Integración Social (PAIS) (823) Partido de Integración Nacional (PIN) (826) Movimiento Afrovides –La Esperanza de un	Se generó una nueva variable de partidismo del Centro Democrático (829) para ver apoyo a Uribe. En esta variable, 1 equivale a apoyo al partido y 0 para las demás respuestas.	LAPOP (2013)

			Pueblo (827) Movimiento Interétnico de Opción Participativa "Mio" (828) Marcha Patriótica (829) Centro Democrático (830) Progresistas (77) Otro (88) NS (98) NR (99) INAP		
	Tamaño del municipio	Es parte de la información que el encuestador reporta.	Respuestas: 1 es para "grande" (más de 100,000); 2 es para "mediana" (entre 25,000 - 100,000), y 3 es para "pequeña" (< 25,000)	Se recodificó: grande es 3, mediano 2 y pequeño 1.	LAPOP (2013)
	Situación económica	"¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?"	Respuesta: va del 1 al 3, en donde 1 es "mejor", 2 es "igual" y 3 es "peor".	Se recodificó. En esta nueva operacionalización 0 es "peor", 1 es "igual" y 2 es "mejor".	LAPOP (2013)
	Educación	"¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?"	Respuesta: 0 es ninguno, de 1 a 5 es primaria, de 6 a 11 es secundaria y de 12 a 18 es universitaria.	Se recodificó para que o equivalga a ningún grado escolar, 1 a primaria, 2 a secundaria y 3 a universidad.	LAPOP (2013)
	Edad	"¿En qué día, mes y año nació usted?"	Instrucciones: Si se niega a decir el día y mes, pedir solo el año o preguntar edad y calcular luego el año. Después, con eso, el encuestador calcula la edad.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)
	Catolicismo	"Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión?"	Instrucciones: No leer opciones. Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si pertenece a la	Se creó una nueva variable. En esta nueva operacionalización 1 es católica y todas las demás equivalen a 0.	LAPOP (2013)

			<p>alternativa 4 u 11. Respuesta: 1) Católico; 2) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia Morava); 3) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo; Baha'i); 4) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión); 5) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de</p>		
--	--	--	---	--	--

			Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra); 6) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones); 7) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esoterica); 10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado); 11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios); 12) Testigos de Jehová.		
	Confianza en las FARC	"¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las FARC?"	Instrucciones: Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es "nada" y 7 es "mucho".	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)
	Confianza en las BACRIM	"¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las BACRIM?"	Instrucciones: Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2013)

			“nada” y 7 es “mucho”.		
	Población	Población total por municipio		Se conservó la cifra completa para registrar las tasas.	Censo poblacional del 2005 publicado por el DANE (2016).

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).

Anexo 2. Operacionalización de las variables para los modelos con LAPOP 2016 presentados en la Tabla 6

Tipo de variable	Variable	Pregunta en la encuesta/medición	Cómo es medida originalmente	Operacionalización	Origen
Variables dependientes	Justicia retributiva	"Se acordó que los miembros rascos de las FARC (no comandantes) que se desmovilicen no irán a la cárcel. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?"	En la mesa de negociación de La Habana, el Gobierno y las FARC han llegado a varios acuerdos. Quisiera pedirle su opinión sobre algunos de ellos. Respuestas: Recuerde que 1 indica que usted se encuentra ‘muy en desacuerdo’ con la afirmación y 7 que usted se encuentra ‘muy de acuerdo’ con la afirmación.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario, pero en el orden contrario para que la lectura sea intuitiva.	LAPOP (2016)
	Justicia restaurativa	Que las FARC reparen económicamente a sus víctimas contribuirá a la reconciliación ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	Instrucciones: Ahora le voy a leer una serie de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2016)
		Recordar públicamente los	Instrucciones: Ahora le voy a leer	Se conservó la operacionalización	LAPOP (2016)

		crímenes cometidos por los miembros de las FARC contribuirá a la reconciliación. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	una serie de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.	ción original del cuestionario.	
		"Que se establezca la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado."	Instrucciones: Ahora le voy a leer una serie de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2016)
Variables independientes	Violencia	Número total de homicidios 2003-2015	Es conteo de eventos de 2003 a 2015 por municipio.	Lo que se hizo fue sumar todos los eventos reportados del 2003 al 2015 por municipio y convertirlo en tasa de homicidio de cada municipio.	Panel de violencia (CEDE, 2019): Ministerio de Defensa
		Número de personas expulsadas por desplazamiento 2003-2015	Número de desplazados registrados en el RUV del 2003 al 2015.	Lo que se hizo fue sumar todos los eventos reportados del 2003 al 2015	Panel de violencia (CEDE, 2019): Registro

				por municipio y convertirlo en tasa para cada municipio.	Único de Víctimas
	Victimización	“¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado que sufre el país? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?”	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".	Para víctima: se conservó como dummy, en donde 1 equivale a que el encuestado haya reportado ser víctima de al menos una forma de victimización y 0 de ninguna.	LAPOP (2016)
		"¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia tuvo que irse del país?"	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		LAPOP (2016)
		“¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto que sufre el país?”	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		LAPOP (2016)
		“¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?”	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		LAPOP (2016)
		“¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?”	Respuesta: 1 o 2, en donde 1 es “sí” y 2 es “no”. Se recodificó para que 1 equivalga a "sí" y 0 a "no".		LAPOP (2016)
	Violencia x victimización	Índice de victimización interactuado con la tasa de personas desplazadas por municipio.			LAPOP (2016) + CEDE (2019)
Controles	Rural/urbano	Es parte de la información que el encuestador reporta: “Rural o urbano”.	Respuesta: 1 si es urbano y 2 si es rural.	Se conservó como variable dicotómica, pero fue recodificada para que 0 fuera “rural” y 1 “urbano”.	LAPOP (2016)

	Sexo	Es parte de la información que el encuestador reporta.	Instrucciones. “Anotar, NO preguntar”.	Se conservó como variable dicotómica, pero fue recodificada para que 0 fuera “hombre” y 1 “mujer”.	LAPOP (2016)
	Partidismo	¿Con cuál partido político simpatiza usted?	Instrucciones: No leer opciones. Respuestas: (801) Partido Liberal (802) Partido Conservador (803) Polo Democrático Alternativo (804) Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional) (805) Cambio Radical (806) Convergencia Ciudadana (808) Colombia Democrática (809) Colombia Viva (810) Movimiento MIRA (817) Alianza Social Indígena (ASI) (819) Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA) (821) Partido Verde (822) Partido de Integración Social (PAIS) (823) Partido de Integración Nacional (PIN) (826) Movimiento Afrovides –La Esperanza de un Pueblo (827) Movimiento Interétnico de Opción Participativa “Mio” (828) Marcha Patriótica	Se generó una nueva variable de partidismo del Centro Democrático (829) para ver apoyo a Uribe. En esta variable, 1 equivale a apoyo al partido y 0 para las demás respuestas.	LAPOP (2016)

			(829) Centro Democrático (830) Progresistas (77) Otro (88) NS (98) NR (99) INAP		
Tamaño del municipio	Es parte de la información que el encuestador reporta.	Respuestas: 1 es para “grande” (más de 100,000); 2 es para “mediana” (entre 25,000 - 100,000), y 3 es para “pequeña” (< 25,000).	Se recodificó: grande es 3, mediano 2 y pequeño 1.	LAPOP (2016)	
Situación económica	“¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?”	Respuesta: va del 1 al 3, en donde 1 es “mejor”, 2 es “igual” y 3 es “peor”.	Se recodificó. En esta nueva operacionalización 0 es “peor”, 1 es “igual” y 2 es “mejor”.	LAPOP (2016)	
Educación	"¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?"	Respuesta: 0 es ninguno, de 1 a 5 es primaria, de 6 a 11 es secundaria y de 12 a 18 es universitaria.	Se recodificó para que o equivalga a ningún grado escolar, 1 a primaria, 2 a secundaria y 3 a universidad.	LAPOP (2016)	
Edad	"¿En qué día, mes y año nació usted?"	Instrucciones: Si se niega a decir el día y mes, pedir solo el año o preguntar edad y calcular luego el año. Después, con eso, el encuestador calcula la edad.	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2016)	
Catolicismo	"Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión?"	Instrucciones: No leer opciones. Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si pertenece a la alternativa 4 u 11. Respuesta: 1) Católico; 2) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico	Se creó una nueva variable. En esta nueva operacionalización 1 es católica y todas las demás equivalen a 0.	LAPOP (2016)	

			(Cristiano, Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia Morava; 3) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo; Baha'i); 4) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión); 5) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra); 6) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones); 7)		
--	--	--	---	--	--

			Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esoterica); 10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado); 11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios); 12) Testigos de Jehová.		
	Confianza en las FARC	"¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las FARC?"	Instrucciones: Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es "nada" y 7 es "mucho".	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2016)
	Confianza en las BACRIM	"¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las BACRIM?"	Instrucciones: Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. Respuesta: del 1 al 7, en donde 1 es "nada" y 7 es "mucho".	Se conservó la operacionalización original del cuestionario.	LAPOP (2016)
	Población	Distribución de la población total, según municipio 2005.	Dado que los eventos están georreferenciados las cifras fueron obtenidas a mano.	Se conservó la cifra completa para registrar las tasas.	Censo poblacional del 2005 publicado por el DANE (2016)

Fuente: LAPOP (2016) y CEDE (2019).

Anexo 3

Anexo 3.1: tasa de desplazados y de homicidios de 2003 a 2012 e interacción entre tasa de homicidios y victimización con la tasa de homicidios como la variable contextual de referencia

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Tasa de desplazados 2003-2012	0.001 [(0.001)]	-0.002*** [(0.000)]	-0.001*** [(0.000)]	-0.002*** [(0.001)]
Tasa de homicidios de 2003-2012	0.049 [(0.030)]	-0.011 [(0.029)]	0.003 [(0.031)]	0.077** [(0.037)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	0.064 [(0.166)]	-0.358** [(0.183)]	0.104 [(0.189)]	0.309 [(0.197)]
Homicidios x victimización	-0.037 [(0.032)]	0.065 [(0.035)]	-0.006 [(0.036)]	-0.055 [(0.037)]
Confianza en las FARC	-0.254*** [(0.055)]	0.183*** [(0.060)]	0.087 [(0.062)]	0.081 [(0.064)]
Confianza en las BACRIM	-0.160*** [(0.061)]	0.078 [(0.067)]	0.039 [(0.069)]	-0.050 [(0.071)]
Centro democrático	-2.255*** [(0.595)]	1.097 [(0.655)]	-0.065 [(0.674)]	0.730 [(0.695)]
Sexo	0.201** [(0.091)]	-0.479*** [(0.101)]	-0.483*** [(0.105)]	-0.480*** [(0.107)]
Educación	0.313*** [(0.070)]	0.155** [(0.078)]	0.219*** [(0.081)]	0.380*** [(0.083)]
Edad	0.008** [(0.003)]	0.003 [(0.004)]	0.004 [(0.004)]	0.010** [(0.004)]
Católica	0.077 [(0.103)]	-0.176 [(0.114)]	-0.249** [(0.118)]	-0.538*** [(0.121)]
Situación económica	0.045 [(0.033)]	-0.033 [(0.037)]	0.000 [(0.038)]	0.063 [(0.039)]
Tamaño del municipio	0.020 [(0.115)]	0.252** [(0.100)]	0.104 [(0.101)]	0.048 [(0.133)]
Rural/Urbano	0.116 [(0.137)]	-0.267 [(0.148)]	-0.298 [(0.153)]	-0.289 [(0.161)]
Constante	4.696*** [(0.432)]	2.572*** [(0.424)]	3.110*** [(0.433)]	3.598*** [(0.505)]
Observaciones	1,333	1,306	1,293	1,302
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).

Anexo 3.2: tasa de desplazados y de homicidios de 2012 e interacción entre tasa de desplazados y victimización con la tasa de desplazados como la variable contextual de referencia

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Tasa de desplazados 2012	0.006 [(0.008)]	-0.006 [(0.009)]	0.006 [(0.008)]	0.004 [(0.010)]
Tasa de homicidios de 2012	0.387 [(0.292)]	0.121 [(0.308)]	-0.095 [(0.283)]	0.185 [(0.358)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	-0.033 [(0.106)]	-0.084 [(0.117)]	0.085 [(0.121)]	0.106 [(0.125)]
Desplazados x victimización	-0.008 [(0.007)]	-0.004 [(0.008)]	-0.007 [(0.008)]	-0.010 [(0.008)]
Confianza en las FARC	-0.255*** [(0.055)]	0.185*** [(0.061)]	0.086 [(0.063)]	0.083 [(0.064)]
Confianza en las BACRIM	-0.162*** [(0.061)]	0.088 [(0.067)]	0.043 [(0.070)]	-0.051 [(0.072)]
Centro democrático	-2.244*** [(0.595)]	1.116 [(0.657)]	-0.092 [(0.675)]	0.678 [(0.697)]
Sexo	0.206** [(0.091)]	-0.482*** [(0.101)]	-0.483*** [(0.105)]	-0.475*** [(0.107)]
Educación	0.310*** [(0.070)]	0.152 [(0.079)]	0.218*** [(0.081)]	0.377*** [(0.083)]
Edad	0.008** [(0.003)]	0.003 [(0.004)]	0.004 [(0.004)]	0.010** [(0.004)]
Católica	0.071 [(0.103)]	-0.178 [(0.115)]	-0.240** [(0.119)]	-0.528*** [(0.122)]
Situación económica	0.044 [(0.033)]	-0.030 [(0.037)]	0.002 [(0.038)]	0.066 [(0.039)]
Tamaño del municipio	0.082 [(0.121)]	0.166 [(0.126)]	0.005 [(0.112)]	-0.079 [(0.149)]
Rural/Urbano	0.094 [(0.137)]	-0.196 [(0.152)]	-0.267 [(0.155)]	-0.256 [(0.163)]
Constante	4.673*** [(0.452)]	2.490*** [(0.485)]	3.232*** [(0.464)]	3.936*** [(0.547)]
Observaciones	1,333	1,306	1,293	1,302
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).

Anexo 3.3: tasa de desplazados y de homicidios de 2012 e interacción entre tasa de homicidios y victimización con la tasa de homicidios como la variable contextual de referencia

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Tasa de desplazados 2012	0.000 [(0.006)]	-0.010 [(0.007)]	0.002 [(0.006)]	-0.002 [(0.008)]
Tasa de homicidios de 2012	0.421 [(0.325)]	-0.133 [(0.340)]	0.037 [(0.324)]	0.358 [(0.393)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	-0.057 [(0.154)]	-0.326 [(0.171)]	0.150 [(0.176)]	0.185 [(0.183)]
Homicidios x victimización	-0.059 [(0.308)]	0.567 [(0.341)]	-0.275 [(0.350)]	-0.347 [(0.364)]
Confianza en las FARC	-0.254*** [(0.055)]	0.188*** [(0.061)]	0.086 [(0.063)]	0.083 [(0.064)]
Confianza en las BACRIM	-0.163*** [(0.061)]	0.086 [(0.067)]	0.044 [(0.070)]	-0.051 [(0.072)]
Centro democrático	-2.242*** [(0.595)]	1.099 [(0.657)]	-0.084 [(0.675)]	0.687 [(0.697)]
Sexo	0.203** [(0.091)]	-0.485*** [(0.101)]	-0.485*** [(0.105)]	-0.478*** [(0.107)]
Educación	0.313*** [(0.070)]	0.156** [(0.079)]	0.218*** [(0.081)]	0.378*** [(0.083)]
Edad	0.008** [(0.003)]	0.003 [(0.004)]	0.004 [(0.004)]	0.010** [(0.004)]
Católica	0.068 [(0.103)]	-0.177 [(0.115)]	-0.244** [(0.119)]	-0.533*** [(0.122)]
Situación económica	0.044 [(0.033)]	-0.031 [(0.037)]	0.003 [(0.038)]	0.067 [(0.039)]
Tamaño del municipio	0.085 [(0.121)]	0.166 [(0.123)]	0.007 [(0.113)]	-0.075 [(0.149)]
Rural/Urbano	0.096 [(0.137)]	-0.190 [(0.151)]	-0.269 [(0.155)]	-0.258 [(0.163)]
Constante	4.667*** [(0.455)]	2.576*** [(0.481)]	3.199*** [(0.467)]	3.890*** [(0.550)]
Observaciones	1,333	1,306	1,293	1,302
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).

Anexo 3.4: prueba de la hipótesis de Weintraub et al. (2015) sobre la relación cuadrática entre violencia y apoyo a la paz. El término de interacción es entre victimización y tasa de desplazados, y en vez de observar la tasa de desplazados como una variable lineal, se crea el término cuadrático

VARIABLES	(Modelo 1) Castigo	(Modelo 2) Conmemoración	(Modelo 3) Verdad	(Modelo 4) Reparación
<i>Variables contextuales</i>				
Término cuadrático de la tasa de desplazados 2003-2012	0.000 [(0.000)]	-0.000*** [(0.000)]	-0.000** [(0.000)]	-0.000** [(0.000)]
Tasa de homicidios 2003-2012	0.038 [(0.026)]	0.020 [(0.024)]	-0.003 [(0.024)]	0.052 [(0.030)]
<i>Variables individuales</i>				
Víctima	-0.012 [(0.111)]	-0.108 [(0.123)]	0.064 [(0.127)]	0.139 [(0.132)]
Desplazados x victimización	-0.001 [(0.001)]	0.000 [(0.001)]	0.000 [(0.001)]	-0.001 [(0.001)]
Confianza en las FARC	-0.255*** [(0.055)]	0.182*** [(0.060)]	0.088 [(0.062)]	0.082 [(0.064)]
Confianza en las BACRIM	-0.161*** [(0.061)]	0.082 [(0.067)]	0.038 [(0.069)]	-0.053 [(0.071)]
Centro democrático	-2.268*** [(0.595)]	1.146 [(0.655)]	-0.058 [(0.674)]	0.720 [(0.696)]
Sexo	0.203** [(0.091)]	-0.482*** [(0.101)]	-0.482*** [(0.105)]	-0.477*** [(0.107)]
Educación	0.313*** [(0.070)]	0.150 [(0.078)]	0.219*** [(0.081)]	0.381*** [(0.083)]
Edad	0.008** [(0.003)]	0.003 [(0.004)]	0.004 [(0.004)]	0.010** [(0.004)]
Católica	0.068 [(0.103)]	-0.171 [(0.115)]	-0.239** [(0.118)]	-0.532*** [(0.122)]
Situación económica	0.043 [(0.033)]	-0.034 [(0.037)]	-0.001 [(0.038)]	0.062 [(0.039)]
Tamaño del municipio	0.048 [(0.114)]	0.212** [(0.100)]	0.075 [(0.095)]	0.019 [(0.127)]
Rural/Urbano	0.122 [(0.137)]	-0.286 [(0.149)]	-0.314** [(0.153)]	-0.298 [(0.161)]
Constante	4.694*** [(0.430)]	2.502*** [(0.423)]	3.168*** [(0.422)]	3.701*** [(0.495)]
Observaciones	1,333	1,306	1,293	1,302
Número de grupos	47	47	47	47

Errores estándar en corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05

Fuente: LAPOP (2013) y CEDE (2019).